



Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Center for Justice And International Law
Centro Pela Justiça e Dereito Internacional
Centre pour la Justice et le Droit International
Pemonton Kowantok Wacüpe Yuwanin Pataset

Justicia y paz en Colombia: El derecho a la verdad, la justicia y la reparación

Análisis de la Ley 975 y Decreto 4760 de 2005
según estándares internacionales de
protección de los derechos humanos

340.152

C397d2 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional , CEJIL
Documentos de coyuntura: Justicia y paz en
Colombia: el derecho a la verdad, la justicia y la
reparación / CEJIL. – San José, Costa Rica : Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional, 2006
52 p. ; 22 x 28 cm.

ISBN 9968– 9474-9-0

1. Leyes – Colombia. 2. Justicia. 3. Paz. 4. Derechos
del hombre. I. Título

Impreso en Costa Rica por
Gossestra Intl., S.A.

Artes Finales:
Alejandro Pacheco R.

Diseño de la Portada:
Diseñadores, S.A.

The logo for CEJIL, featuring the letters 'CEJIL' in a serif font. A small crown-like symbol is positioned above the letter 'I'.

CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Económico y Social de la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva
direccion@cejil.org

Tatiana Rincón

Directora del Programa para la Región
Andina, Norteamérica y el Caribe
washington@cejil.org

Soraya Long

Directora del Programa para
Centroamérica y México
mesoamerica@cejil.org

Beatriz Affonso

Directora del Programa para Brasil
brasil@cejil.org

Liliana Tojo

Directora del Programa para el Cono Sur
sur@cejil.org

Kate Lasso

Directora de Desarrollo Institucional
klasso@cejil.org

Susana García

Desarrollo Institucional
Programa para Centroamérica y México
sgarcia@cejil.org

Victoria Amato y Nancy Marín

Difusión y Prensa
difusion@cejil.org

CEJIL/WASHINGTON

1630 Connecticut Ave., NW,
Suite 401
Washington D.C. 20009 - 1053
Estados Unidos
Tel. (202) 319-3000
Fax (202) 319-3019
E-mail: washington@cejil.org

CEJIL/MESOAMERICA

Apartado Postal 441-2010
San José, Costa Rica
Tel. (506) 280-7473 / 7608
Fax (506) 280-5280
E-mail: mesoamerica@cejil.org

CEJIL/BRASIL

Av. Mal. Câmara, 350/707,
Centro 20020-080
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel. (55-21) 2533-1660
Fax. (55-21) 2517-3280
Email: brasil@cejil.org

CEJIL/CONO SUR

Esmeralda 517. Piso 2 "A" C1007 ABC
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (0054) 11 4328-1025
Email: sur@cejil.org

Documentos de Coyuntura CEJIL

Presentación

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional dedicada a asegurar la implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos, desarrolla su mandato a través de tres programas: defensa, capacitación y difusión, y fortalecimiento del sistema interamericano.

En el ámbito del programa de fortalecimiento del sistema interamericano, CEJIL impulsa y participa en debates, campañas de cabildeo, procesos de formulación legislativa y constitucional sobre la incorporación de los estándares internacionales en el ámbito interno, la ejecución de decisiones del sistema interamericano, las sucesivas iniciativas de reforma a los mecanismos de protección de derechos humanos, los procesos de selección de miembros del sistema, entre otros. “Documentos de Coyuntura” tiene el propósito de impulsar y fortalecer la reflexión y el debate en torno a temas relevantes para hacer realidad los derechos y garantías previstas en el sistema interamericano, tanto aquellas de discusión en el ámbito local, multilateral, como en la esfera de los órganos del sistema de protección: la Comisión y la Corte Interamericanas.

Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es motivo de gran satisfacción presentar el documento: “Justicia y Paz en Colombia: El Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación—Análisis de la Ley 975 y Decreto 4760 de 2005 según estándares internacionales de protección de los derechos humanos.” Con este número de “Documentos de Coyuntura”, nos proponemos contribuir activamente a la discusión, entre actores estatales, intergubernamentales y de la sociedad civil, de Colombia y de otros países de América, sobre las obligaciones internacionales del Estado colombiano—al adelantar una política de paz con los grupos armados ilegales—de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La publicación de este documento ha sido posible gracias al apoyo generoso de la Fundación Ford, el Open Society Institute, la Fundación Merck y MISEREOR, quienes están exentos de responsabilidad alguna sobre el contenido del mismo.

Desde ya, anhelamos que este documento contribuya a alimentar un debate franco y fructífero sobre los temas de derechos humanos relevantes en el ámbito interamericano.

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

Índice

Justicia y paz en Colombia: El derecho a la verdad, la justicia y la reparación

Análisis de la Ley 975 y Decreto 4760 de 2005 según estándares internacionales de protección de los derechos humanos	9
• Introducción	9
• La Ley 975 en contexto.....	10
• El derecho a la verdad	12
• El derecho a la justicia	14
• La obligación estatal de investigar las violaciones de derechos humanos.....	14
• El acceso de las víctimas al proceso penal.....	15
• La obligación estatal de sancionar proporcionalmente las violaciones de los derechos humanos ...	17
• El derecho a la reparación	20
• Conclusiones y recomendaciones	23
 ANEXO 1:	
Ley 975 de 2005	25
 ANEXO 2:	
Decreto 4760 de 2005.....	39

Justicia y paz en Colombia: El derecho a la verdad, la justicia y la reparación

Análisis de la Ley 975 y Decreto 4760 de 2005

según estándares internacionales de protección de los derechos humanos

Introducción

El objetivo principal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacionales. Entre sus mandatos específicos se encuentra el de contribuir a la incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en la normativa interna de los países de las Américas.

De acuerdo con su mandato, el interés de CEJIL al presentar este Documento de Coyuntura¹ es contribuir al debate sobre la Ley 975 de 2005², denominada “Ley de Justicia y Paz”, resaltando la obligación del Estado colombiano de cumplir con los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos en el diseño y la implementación de una política de paz. CEJIL considera que los procesos de transición a la paz o a la democracia deben y pueden reconocer los derechos de las víctimas como elemento fundamental para la consolidación del estado de

derecho y de una paz duradera. En el caso colombiano, CEJIL representa—en el marco de procesos ante el sistema interamericano de derechos humanos—cientos de víctimas cuyos derechos fundamentales se podrían ver afectados por la Ley 975.

El conocimiento y debate de la Ley 975 tiene una especial relevancia para los derechos humanos de los miles de víctimas del conflicto armado colombiano, particularmente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Pero la tiene también para las víctimas de otros conflictos, y para quienes consideramos que es posible buscar soluciones a estos conflictos respetuosas de los estándares internacionales de derechos humanos.

La Ley 975 de 2005 representa la culminación de una etapa del proceso de negociación que el Gobierno colombiano adelanta con los grupos paramilitares (las Autodefensas Unidas de Colombia³), concluida en julio de 2005 con la aprobación por el Congreso de dicha ley, y con su posterior sanción por el Presidente de la República Álvaro Uribe⁴. La Ley otorga ciertos beneficios jurídicos a los que se acogen a ella, a cambio de la desmovilización, la rendición de una versión

1 Este documento presenta una posición institucional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El mismo fue elaborado por el abogado Michael Camilleri, con el apoyo de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva, Tatiana Rincón, Directora de la oficina de Washington, y de los abogados/as Ana Aliverti, David Baluarte, Pedro Díaz, Julieta Di Corleto y Maria Clara Galvis. También contribuyeron Judith Schonsteiner, Vanessa Montague James, Marianela Fuertes Forero y Olga Lucia Pérez.

2 Véase Anexo 1.

3 Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) agruparon a los grupos paramilitares en negociación con el Gobierno Nacional.

4 La Ley 975 de 2005, es aplicable a todo miembro de los grupos armados al margen de la ley que llenan las condiciones establecidas, no solamente a los miembros de las AUC. De hecho, entre los primeros en someterse a la Ley se encontraron 38 miembros de las FARC. “Primeros combatientes en acogerse a ley de Justicia y Paz fueron 38 guerrilleros de las FARC,” *El Tiempo*, 9 de septiembre de 2005. Sin embargo, la norma resultó de las negociaciones de las AUC y su objeto principal es desmovilizar a estos grupos paramilitares; la Ley no pretende lograr la paz con las fuerzas guerrilleras existentes en Colombia. Por lo tanto, el presente documento analiza la Ley 975 en su aplicación a las AUC, aunque muchas de las observaciones serían igualmente aplicables a la desmovilización bajo la Ley de miembros de otros grupos armados al margen de la ley.

libre⁵, la entrega de bienes adquiridos ilícitamente, y la participación en el programa de reparación a las víctimas. El 30 de diciembre de 2005, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 4760 de 2005, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005”⁶.

El presente análisis de la Ley 975 y el Decreto 4760 tiene como base un escrito de *amicus curiae*⁷, elaborado por CEJIL y la Clínica de Derechos Humanos de Yale Law School que fuera presentado a la Corte Constitucional colombiana en el marco de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 975. Este análisis nos lleva a concluir que la Ley desconoce, en aspectos importantes, los estándares internacionales que obligan al Estado colombiano respecto a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Además de mostrar las maneras en que la Ley 975 no se ajusta a estos estándares, el presente documento sugiere algunas recomendaciones básicas que deberían ser tenidas en cuenta para lograr un marco normativo y una aplicación de ese marco respetuosos del derecho internacional de los derechos humanos.

La Ley 975 en contexto

Durante las últimas dos décadas la comunidad internacional ha sido testigo de varios procesos de transición a la democracia o a la paz. Desde las experiencias de América Latina, Sudáfrica hasta la ex-Yugoslavia y Timor del Este, uno de los elementos claves de dichos procesos ha sido la necesidad de afrontar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el período anterior a la transición. Estos procesos de transición, sean de la guerra a la paz o de regímenes autoritarios a la democracia o ambos, son antecedentes de los cuales otros países que pretenden entrar en un período de transición pueden aprender.

La acumulación de experiencias de transición ha sido útil desde la perspectiva de la ciencia social, dando lugar también a un naciente pero creciente *corpus iuris* de una justicia en periodos de transición. Lejos de contradecirse, la perspectiva socio-política refuerza la jurídica, afirmando que garantizar una adecuada verdad, justicia y reparación a las víctimas es crucial para alcanzar una verdadera transición a una democracia inclusiva y regida por el estado de derecho. La obligación general de garantía y respeto de los derechos humanos, propia del derecho internacional de los derechos humanos, no se suspende en los procesos de transición a la paz o a la democracia. De este modo, los Estados que inician, hoy en día, negociaciones políticas dentro del marco de un proceso de transición, tienen que tomar en cuenta ciertas limitaciones en el momento de otorgar concesiones a los diferentes partes de las negociaciones.

Colombia es una de las naciones en el mundo que se encuentran pendiente de un verdadero y urgente proceso de transición de la guerra a la paz. Un conflicto armado de más de medio siglo ha dejado cientos de miles de muertos y heridos, miles de secuestrados y desaparecidos, además de unas tres millones de personas desplazadas internas⁸. El conflicto se ha caracterizado por una falta de respeto, a veces flagrante, de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los varios actores armados: las fuerzas del Estado colombiano, los grupos guerrilleros, y los paramilitares⁹.

Uno de los aspectos más relevantes del conflicto colombiano durante los últimos veinte años ha sido la participación, además de los grupos guerrilleros, de los paramilitares. Contando frecuentemente con la colaboración o la tolerancia de las fuerzas armadas

5 Según el Decreto 4760 de 2005 (véase nota 6, *infra*), en la versión libre el desmovilizado “manifestará libre y voluntariamente todos los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley...” El desmovilizado podrá renunciar al derecho de no autoincriminarse, y la información recaudada en la versión libre tendrá plenos efectos probatorios. Decreto 4760 de 2005, art. 5.

6 Decreto 4760 del 30 de diciembre de 2005, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005.” Véase Anexo 2.

7 El escrito de *amicus curiae*, presentado por CEJIL y la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de Yale Law School, está disponible en el sitio web de CEJIL, www.cejil.org. El escrito fue entregado a la Corte Constitucional antes de la emisión del Decreto 4760 y por tanto considera solamente lo dispuesto por la Ley 975.

8 Véase Refugees Internacional, www.efintl.org. En 2004 fueron desplazados 863 personas por día. “For Millions, Nowhere Left to Run,” Inter-Press Service, 6 de octubre de 2005.

9 Véase, por ejemplo, Human Rights Watch, “Guerra Sin Cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario” (1998).

colombianas¹⁰, los grupos paramilitares son responsabilizados por el 77% de las violaciones de derechos humanos¹¹ en el conflicto colombiano.

Nacida en el marco del proceso de negociación con las AUC, la Ley 975 de 2005 otorga ciertos beneficios jurídicos a los que se acogen a ella¹². Esta Ley llenó un vacío existente en el marco legal vigente al permitir la aplicación de un régimen de beneficios penales a las personas previamente vinculadas a un proceso penal (en calidad de imputadas o acusadas) o condenadas por delitos, incluyendo las graves violaciones de derechos humanos y el narcotráfico. Estas personas habían sido excluidas de tales beneficios en las leyes de desmovilización anteriores (entre ellas, la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003).

Dado el carácter excesivamente prolongado del conflicto armado que vive Colombia y la esperanza de lograr la paz, la Ley 975 contó en su momento de aprobación con el apoyo de una parte importante (pero no mayoritaria) de la población colombiana¹³ y de una mayoría (pero no calificada) en el Congreso. Sin embargo, la Ley también ha sido objeto desde su momento de presentación de fuertes cuestionamientos por parte de diversos sectores tanto de la opinión nacional como internacional, algunos de los cuales la calificaron de ser una ley de impunidad disfrazada¹⁴. El gobierno colombiano ha insistido en que la Ley representa un nuevo modelo de justicia de transición, que, si bien no es el ideal, sí logra alumbrar un camino

hacia la desmovilización mientras cumple con las obligaciones del Estado en materia de justicia, verdad y reparación¹⁵.

En su “Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia” del año 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “Comisión Interamericana”) señaló:

Las normas internacionales vigentes para los Estados miembros, su interpretación a través de la jurisprudencia y los lineamientos recogidos por los órganos intergubernamentales, coinciden en identificar a la verdad, la justicia y la reparación como desafíos fundamentales e ineludibles en la reconstrucción de una cultura de paz, tolerancia, respeto a la ley y rechazo a la impunidad¹⁶.

Al señalar la verdad, la justicia y la reparación como “desafíos fundamentales e ineludibles”, la Comisión Interamericana reconoce tanto los avances que ha habido en los procesos de transición durante de las dos últimas décadas como la realidad de la difícil tarea de consolidar la democracia y el estado de derecho. La verdad, la justicia y la reparación son elementos esenciales de esta tarea. La verdad, por la necesidad de saber lo que pasó para no repetirlo, de conocer y poder dismantelar así las redes de apoyo de los grupos armados ilegales, de llegar a un consenso sobre

10 Véase, por ejemplo, Corte I.D.H., *Caso de la Masacre de Mapiripán*, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr. 119; Corte I.D.H., *Caso 19 Comerciantes*, sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párrs. 119-124; Comisión I.D.H., “Informe sobre el proceso de la desmovilización en Colombia,” 2004, párrs. 50-52; Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” (2002), E/CN.4/2002/17, párrs. 65-68; y Comisión I.D.H., “Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia” (1999), Capítulo IV, párrs. 60-62, 236-272.

11 Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Abogados Sin Fronteras Francia (ASF), Informe Misión Internacional de Investigación, “Colombia ¿Administración de la Justicia... o de la impunidad?” marzo de 2003, p. 6.

12 Como se explicó anteriormente, aunque la Ley 975 resultó de las negociaciones entre las AUC y el Gobierno colombiano, la Ley es aplicable a todo miembro de los grupos armados al margen de la ley que llenen las condiciones establecidas, no solamente a los miembros de las AUC. Véase nota 4, *supra*.

13 Una encuesta realizada por la empresa Gallup Colombia durante los días 21 a 24 de julio de 2005 en 56 ciudades de las diferentes regiones del país reveló que el 76,4% de los colombianos encuestados se declaró de acuerdo con las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno con los grupos paramilitares, y que el 40,5% se declaró de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz. “Uribe, sin rival en la carrera por Presidencia,” *El País*, disponible en <http://elpais-cali.terra.com.co/paisonline/notas/Julio292005/A229N1.html>.

14 Véase, por ejemplo, “Colombia defiende Ley de Justicia y Paz,” *BBC Mundo.com*, 18 de julio de 2005, http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4695000/4695157.stm

15 *Id.*

16 Comisión I.D.H., Informe sobre desmovilización en Colombia 2004, *supra* nota 10, párr. 28.

crímenes pasados como fundamento de un nuevo orden sociopolítico y jurídico, y de dar a los familiares de las víctimas de éstos crímenes una respuesta acerca de lo que pasó a sus seres queridos. La justicia, por la exigencia de combatir la impunidad que alimenta la violencia, y de marcar la transición a una sociedad protectora de los derechos humanos y sometida al imperio de la ley, en la que se restablezca el orden público y garantice la vigencia de reglas de juego político que permitan la libre defensa de valores en un contexto de tolerancia¹⁷. Y la reparación, por ser un paso vital para la reconciliación social y la consolidación de una democracia inclusiva que reconoce la dignidad y el estatus de las víctimas como tales, y establece relaciones de confianza cívica y solidaridad con ellas¹⁸.

Retomando lo señalado por la Comisión Interamericana, el presente Documento de Coyuntura evalúa la conformidad de la Ley 975 de 2005 y el Decreto 4760 de 2005 con algunos de los estándares internacionales¹⁹ aplicables al Estado colombiano respecto a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación²⁰.

El derecho a la verdad

El derecho internacional ha reconocido que tanto las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares como la sociedad en general tienen el derecho de conocer la verdad sobre estas violaciones²¹.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos²² ha desarrollado una amplia jurisprudencia en la que reconoce que, al no investigar exhaustivamente las violaciones de derechos humanos, el Estado vulnera el derecho de las víctimas y de los familiares a saber la verdad sobre lo ocurrido, lo cual agrava su sufrimiento, al crear un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos²³. La Corte ha establecido que los Estados deben facilitar toda la información necesaria para aclarar los hechos y las circunstancias que rodean una violación de un derecho fundamental²⁴. En este sentido, la mera existencia de tribunales y leyes destinados a cumplir las obligaciones consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana no es suficiente²⁵.

17 Véase Comisión I.D.H., Informe sobre Colombia 1999, *supra* nota 10, Consideraciones Finales, párrs.6, 7.

18 Véase, Carlos Martín Beristain, “Reconciliación y democratización en América Latina: un análisis regional,” en IIDH/IDEA, *Verdad, justicia y reparación: Desafíos para la democracia y la convivencia social* (2005), p. 69.

19 Por su carácter obligatorio para el Estado colombiano, el presente documento se enfoque en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

20 La Corte Constitucional colombiana coincide en otorgar especial relevancia a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Véase C-228-02, sección 4.4.

21 Véase, Corte I.D.H., *Caso Myrna Mack Chang*, sentencia del 25 de noviembre 2003, Serie C No. 101, párr. 274: “El derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad (...)” Véase también, Corte Constitucional de Colombia, C-228-02, sección 4.4, “El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos,” citando Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez*, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, y *Caso Barrios Altos*, sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75.

22 En adelante, la “Corte Interamericana”.

23 Véase Corte I.D.H., *Caso Blake*, sentencia del 24 de enero 1998, Serie C No. 36, párr. 114. Véase también Corte I.D.H., *Caso Castillo Páez*, sentencia del 3 de noviembre 1997, Serie C No. 34, párr. 90; Corte I.D.H., *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*, sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, párr. 112.

24 *Caso Barrios Altos.*, *supra* nota 21, párr. 45.

25 Véase Corte I.D.H., *Caso Bámaca Velásquez*, sentencia del 25 de noviembre 2000, Serie C No. 70, párr. 191.

La Comisión Interamericana a su vez ha señalado la importancia del derecho a la verdad para la sociedad afectada por una violación grave a los derechos humanos, estableciendo que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro²⁶. El conocimiento público de los hechos tiene como objetivo que la información conocida a través del doloroso proceso de averiguación impida que dichos delitos vuelvan a suceder²⁷.

Respecto a la búsqueda de la verdad y al esclarecimiento de los hechos, la Ley 975 y el Decreto 4760 establecen un procedimiento mediante el cual el desmovilizado rinde una versión libre²⁸ ante un Fiscal Delegado asignado para el proceso de desmovilización, manifestando los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo armado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos se realizaron, los bienes que se entregarán para la reparación a las víctimas, la fecha de su ingreso al grupo armado, así como “toda otra circunstancia que contribuya de manera efectiva a obtener la verdad”²⁹. Conforme a la Ley 975, si se establece con posterioridad a la sentencia o al indulto que la versión de los hechos no fue acorde a la verdad, y se llegan a imputar a un beneficiario de la Ley 975 delitos no incluidos en su versión libre, el beneficiario aún así no pierde el derecho a la pena alternativa. Si acepta haber participado en la realización de estos delitos, y si el fiscal no puede probar que la omisión original fue intencional, solamente se aumenta la pena alternativa impuesta en un máximo de un veinte por ciento³⁰.

Si bien requiere del desmovilizado revelar alguna información sobre su participación en el grupo paramilitar, el procedimiento establecido por la Ley 975 y el Decreto 4760 no obliga a sus beneficiarios a revelar toda la información sobre sus actos delictivos (y los de su grupo armado) para acceder al beneficio de la pena alternativa, ni provee un mecanismo lo suficientemente eficaz para incentivar una confesión plena y fidedigna. Entre otros elementos claves de información que serían necesarios para esclarecer la verdad sobre los grupos paramilitares y sus crímenes, la versión libre no obliga a quien la rinde a informar sobre: la estructura militar, política, financiera y redes de apoyo (incluso de la fuerza pública) con que cuenta el grupo en cuestión; la totalidad de los hechos delictivos en los que haya participado o de que tenga conocimiento; los frentes anteriores en donde participó; los alias o seudónimos y falsos documentos de identidad; el armamento empleado, incluyendo su origen, utilización y destino; los resultados de los operativos; los lugares de comisión de delitos o donde se encuentran evidencias físicas de los mismos (incluyendo restos mortales); y la titularidad inicial de los bienes apropiados indebidamente. Aunque del Decreto 4760 se puede colegir que el Fiscal puede preguntar sobre todos estos asuntos³¹, ni la Ley ni el Decreto contemplan suficientes consecuencias disuasivas por no revelar la información necesaria para esclarecer plenamente las violaciones cometidas. Esto hace incierto que el desmovilizado revele plenamente lo que sabe al respecto. A pesar de la expedición del Decreto 4760, la verdad sigue estando sometida a la voluntad del desmovilizado de revelar información aunque no tenga obligación o incentivo serio para hacerlo.

26 Comisión I.D.H., Informe Anual 1985-1986, Capítulo V, “Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en 1948 por la Novena Conferencia Americana), y la Convención Americana,” p. 205. Véase también, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Question of Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political Rights), Final Revised Report of U.N. Special Rapporteur for Impunity, Louis Joinet, pursuant to Subcommission Resolution 1995/35, Commission on Human Rights, 48a sesión (1996), Agenda Provisional, Item 10, U.N.Doc E/CN.4/Sub.2/1996/18.

27 Véase Comisión I.D.H., Informe Anual 1985-1986, *supra*.

28 La versión libre no se rinde bajo juramento y no puede generar proceso por falso testimonio, conforme a las reglas del debido proceso que protegen los derechos del imputado.

29 Decreto 4760 de 2005, art. 5. Véase también Ley 975 de 2005, art. 17.

30 Véase Ley 975 de 2005., art. 25. Esta pena solamente se aplica a los que se niegan a admitir su participación en un hecho punible cometido antes de su desmovilización, no se le puede aplicar a los que sí acepten su participación pero no revelan todo lo que conocen sobre el hecho.

31 Establece, por ejemplo, que el fiscal “interrogará sobre todos los hechos de que [el desmovilizado] tenga conocimiento.” Decreto 4760 de 2005, art. 5.

Se puede concluir, entonces, que la Ley 975 no convirtió en prioritaria la revelación de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares, en la medida en que no estableció que los beneficios penales se reciban en función de una confesión plena. Frente a una oportunidad única para lograr la verdad sobre el fenómeno paramilitar y los miles de crímenes cometidos por estos grupos, la Ley y su Decreto establecen un procedimiento que promueve solamente una verdad o superficial o parcial. Aunque una hábil realización de la versión libre por parte del Fiscal puede contribuir a resolver, en cierta medida, estas dificultades, la Ley 975 sigue dejando bastante incierto la garantía del derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y de la sociedad colombiana como un todo.

El derecho a la justicia

El derecho a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos implica obligaciones estatales diversas y autónomas, entre ellas la obligación de investigar, la obligación de garantizar el acceso de las víctimas al proceso penal, y la obligación de sancionar proporcionalmente a los responsables de las violaciones.

La obligación estatal de investigar las violaciones de derechos humanos

La obligación de los Estados de investigar las violaciones de los derechos humanos está firmemente establecida en el derecho internacional. La Corte Interamericana ha destacado en reiteradas ocasiones desde su primera sentencia³² que los Estados tienen la obligación, de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de investigar y sancionar las violaciones de los derechos

humanos de manera seria y diligente. Las obligaciones son afirmativas; los Estados deben realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de todos los responsables, tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales de las violaciones de los derechos humanos, así como sus potenciales encubridores³³.

Adicionalmente, la Corte Interamericana ha sostenido en forma constante que las condiciones enfrentadas por un país no lo exoneran de la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. En el *Caso de la Masacre de Mapiripán* la Corte Interamericana reconoció las “difíciles circunstancias” que existen en Colombia, pero rechazó el argumento del Estado de que eso justifique el incumplimiento de los deberes del Estado bajo la Convención Americana³⁴.

En su momento, la Ley 975 parecía establecer plazos para la formulación de la imputación y la conclusión de la investigación poco consistentes con la conducción de una investigación exhaustiva y eficaz. La emisión del Decreto 4760 aclara, en parte, la situación en el sentido de que si los fiscales cuentan con todos los recursos e independencia necesarios, deben poder tener el tiempo suficiente para adelantar investigaciones serias en la mayoría de los casos. Según el marco establecido por la Ley 975 y el Decreto 4760, antes de recibir la versión libre del desmovilizado, el fiscal cuenta con un plazo máximo de seis (6) meses para realizar la investigación previa³⁵. La versión libre puede desarrollarse en varias audiencias³⁶. Después de recibirla, y cuando de la evidencia o de la versión libre del desmovilizado, se puede inferir razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos, el fiscal tiene treinta y seis (36) horas para realizar una audiencia de formulación de imputación³⁷. A partir de esta audiencia, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz³⁸, con el

32 Véase *Caso Velásquez Rodríguez*, *supra* nota 21, párrs. 174 y 177.

33 Corte I.D.H., *Caso de la Comunidad Moiwana*, sentencia del 15 de junio de 2005. Serie C, No. 124, párrs. 145, 146. Véase también *Caso Myrna Mack*, *supra* nota 21, párr. 273: “[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad.”

34 *Caso Mapiripán*, *supra* nota 10, párr. 192o).

35 Decreto 4760 de 2005, art. 4.

36 *Id.*, art. 5.

37 Ley 975 de 2005, art. 17.

38 Esta unidad se establece por medio del artículo 33 en la referida Ley 975 de 2005.

apoyo de su grupo de policía judicial, tiene un plazo máximo de sesenta (60) días para adelantar las labores de investigación y verificación de los hechos cometidos por el desmovilizado³⁹. Este plazo de sesenta días se puede prorrogar de manera excepcional, nunca excediendo de 120 días⁴⁰. En total, el fiscal tiene hasta diez meses (y aún más si se recibe la versión libre en varias audiencias) para adelantar investigaciones sobre cada desmovilizado.

Ahora bien, aún cuando diez meses parece ser un plazo suficiente para adelantar su labor de investigación, realizar investigaciones eficaces y exhaustivas durante este período no será fácil. Hay miles y miles de crímenes por aclarar, algunos de ellos constituyendo complejas violaciones de derechos humanos ocurridas hace muchos años en zonas geográficas distantes de la sede de los cuerpos investigativos. Además, la posibilidad real que un número considerable de paramilitares rindan su versión libre dentro de un plazo muy breve complica aún más la tarea de los fiscales, en la medida en que exige la investigación de numerosos crímenes al mismo tiempo por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz, que se encuentra compuesta por tan solo veinte fiscales⁴¹.

Si bien el término para la investigación es significativo, la realización de investigaciones eficaces durante este período dependerá de los recursos con que cuenten los fiscales, del respeto dado a su independencia, incluso en casos con sensibilidad política, y de la voluntad de estos mismos fiscales de aprovechar al máximo la flexibilidad que les otorga la Ley 975. Deben, por ejemplo, interrogar extensivamente y sistemáticamente a los desmovilizados, adoptando como presunción que las omisiones en la versión libre son intencionales, sobre todo cuando al desmovilizado se le ha preguntado directamente sobre un crimen⁴². Deben también—

particularmente en el caso de paramilitares con posible participación en numerosas atrocidades y/o posesión de cuantiosos bienes producto de la ilegalidad—recibir la versión libre en varias audiencias para permitir una mayor verificación. Finalmente, deben emplear métodos de investigación sofisticados y sistemáticos, en el ánimo de desmontar las estructuras paramilitares al igual que otras organizaciones criminales, cruzando toda la información disponible de investigaciones anteriores y paralelas, registros de propiedad, fuentes públicas y otros⁴³.

Como se ha señalado, la Corte Interamericana ha sido clara en establecer la obligación estatal de realizar investigaciones de violaciones a los derechos humanos con la debida diligencia, realizando todas aquellas actuaciones que sean necesarias con el fin de obtener un resultado. El reto que enfrentan los fiscales encargados de adelantar las investigaciones bajo la Ley 975 sigue siendo formidable, a pesar de las importantes aclaraciones hechas por el Decreto 4760 respecto al plazo con que cuentan ellos para realizar esta importante labor. Para cumplir con la obligación internacional de investigar eficazmente las violaciones de derechos humanos, estos fiscales tendrán que contar con un alto grado de compromiso, independencia, apoyo logístico y sofisticación técnica.

El acceso de las víctimas al proceso penal

Según lo que establece el derecho internacional, las víctimas deben tener amplias oportunidades de participar en los procesos penales que se llevan a cabo sobre las violaciones que se cometieron en su contra.

La jurisprudencia del sistema interamericano establece el derecho de las víctimas y sus familiares de tener

39 Ley 975 de 2005, artículo 18.

40 Decreto 4760 de 2005, art. 6, que remite al artículo 158 de la ley 906 de 2004.

41 Ley 975 de 2005, art. 33. Véase también Human Rights Watch, “Smoke and Mirrors: Colombia’s demobilization of paramilitary groups” (1 de agosto de 2005), a <http://hrw.org/reports/2005/colombia0805/>, p.53.

42 Véase, Rodrigo Uprimny Yepes y María Paula Saffon Sanín, “La Ley de ‘justicia y paz’: ¿una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades?” en Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DJS), *¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación en Colombia* (manuscrito de noviembre, 2005), p. 171.

43 Véase *id.*

pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación y el proceso penal⁴⁴. Efectivamente, uno de los aportes más relevantes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido el reforzamiento del papel central que las víctimas deben tener en la investigación de los hechos así como en el juicio de sus responsables⁴⁵. El primer caso en ese sentido fue *Villagran Morales*⁴⁶, y en el *Caso Bulacio* la Corte Interamericana de una manera aún más clara decidió que los familiares de la víctima debían tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones penales como querellantes⁴⁷. Esta jurisprudencia fue reafirmada, entre otros, en el *Caso de la Masacre de Mapiripán*⁴⁸.

La Ley 975 genera, en relación con este punto, una situación de incertidumbre que afecta seriamente el derecho de las víctimas y de sus familiares a participar en todas las etapas del proceso, al no especificar cuál de los dos códigos de procedimiento penal vigentes en Colombia—la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004—se aplicará a los procesos cobijados por la Ley 975.

La ambigüedad creada por la no-remisión a un código de procedimiento penal en particular tiene implicaciones serias para los derechos de las víctimas y sus familiares de actuar en el proceso. En primer lugar, porque el código aprobado mediante la Ley 600 de 2000 garantiza a las víctimas el acceso al expediente⁴⁹, mientras que el código aprobado mediante la Ley 906 de 2004 no les garantiza esta posibilidad, limitando así la capacidad de los familiares de las víctimas de participar en el proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos⁵⁰.

En segundo lugar, porque esta ambigüedad de la Ley pone en duda el derecho de la víctima y de sus familiares de constituirse en parte civil en cualquiera de las etapas del proceso. En efecto, la Ley 975 no establece explícitamente que las víctimas y sus familiares puedan constituirse en parte civil en cualquiera de las etapas del proceso judicial, y, por el contrario, solo se prevé expresamente la participación de la víctima en la fase reparatoria⁵¹.

Finalmente, en cuanto a los derechos de las víctimas explícitamente reconocidos por ella, la Ley es aún más restrictiva que la propia Ley 906 de 2004, repitiendo uno por uno los derechos de las víctimas establecidos en el artículo 11 de ese código con excepción de uno, el derecho, “(a) que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto”⁵².

El Decreto 4760 intenta aclarar la ambigüedad sobre el código penal aplicable a los procesos cobijados por la Ley 975 y ser más específico respecto a la capacidad de las víctimas de actuar en estos procesos. Ambos esfuerzos son laudables, pero no totalmente exitosos. Respecto al primero, el Decreto 4760 establece que se aplicarán las normas de procedimiento penal contenidas en la ley 906 de 2004 y, en lo compatible con la estructura del proceso regulado por aquella, lo dispuesto por la ley 600 de 2000⁵³. Así, el código de 2004 evidentemente tiene precedencia sobre el de 2000, pero todavía no queda totalmente claro como funcionará la interacción “en lo compatible” entre los dos.

44 Véase, por ejemplo, Corte I.D.H., *Caso Huilca Tecse*, sentencia del 3 de marzo 2005, Serie C. No. 121, párr. 107.

45 Véase Corte I.D.H., *Caso del Caracazo*, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia del 29 de agosto de 2002, Serie C No. 95, punto resolutivo 1.

46 Corte I.D.H. *Caso Villagrán Morales y otros*, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, párr. 227.

47 Corte I.D.H., *Caso Bulacio*, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C No. 100, párrs. 106 y 162, punto 4.

48 *Caso Mapiripán*, *supra* nota 10, párr. 219.

49 Ley 600 de 2000, art. 30: “Acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado. La víctima o el perjudicado, según el caso, podrán ejercer el derecho de petición ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas. El funcionario deberá responder dentro de los diez (10) días siguientes.

50 El artículo 37(6) de la Ley 975 de 2005 contempla como derechos de las víctimas “el ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal” (subrayado nuestro), hecho que puede llegar a limitar su capacidad de acceder a otras decisiones, así como al conocimiento íntegro del expediente.

51 Ley 975 de 2005, arts. 23 y 45. Véase también Comisión Colombiana de Juristas, “Sin Garantía al Derecho a la Reparación,” Comunicado de prensa del 20 de junio de 2005.

52 Cf. Ley 975 de 2005, art. 37, y Ley 906 de 2004, art. 11.

53 Decreto 4760 de 2005, art. 2.

Respecto a los derechos explícitamente otorgados a las víctimas, el Decreto 4760 parece representar un paso adelante cuando establece que puedan intervenir directamente durante todo el proceso⁵⁴. Sin embargo, también repite al igual que la Ley 975 que las víctimas podrán participar en el incidente de reparación integral⁵⁵, lo que parecería redundante e innecesario si tuvieran la posibilidad de participar en todo el proceso. Adicionalmente, existen dudas sobre las limitaciones que pueden surgir de lo que significará, en la práctica, que a las víctimas solo se les suministrará información pertinente para la protección de sus intereses⁵⁶, y que tendrán derecho a controvertir las decisiones que las afecten⁵⁷ pero no expresamente a interponer recursos.

Finalmente, el hecho de haber excluido explícitamente el derecho de las víctimas a que sus intereses sean considerados al adoptarse una decisión sobre la persecución del victimario adquiere mayor relevancia al incluir el Decreto 4760 una disposición sobre el principio de oportunidad⁵⁸. Según el Decreto, se aplicará este principio de discreción a los llamados testafierros, lo que en algunos casos facilitará la entrega de bienes para la reparación pero en otros contribuirá a encubrir transacciones fraudulentas por parte de los grupos criminales y a dejar anónimos los colaboradores de estos grupos. Por tanto, el principio de oportunidad no debe ser la regla general. Al contrario, se debe investigar todo caso de transferencia de bienes adquiridos presuntamente de manera ilícita, dando a las víctimas la oportunidad de aportar información y defender sus intereses en la investigación penal, aplicando el principio solamente a los poseedores de buena fe.

Aunque el Decreto 4760 aclara y mejora, en cierta medida, las disposiciones de la Ley 975 respecto a las posibilidades de las víctimas de actuar en el proceso penal, siguen existiendo dudas sobre aquellas. Será

importante resolver estas dudas e interpretar toda ambigüedad a favor de las víctimas, para garantizar la conformidad de los procesos cobijados por la Ley 975 con la obligación estatal de garantizar el derecho de las víctimas de tener pleno acceso y capacidad de actuar en todo el proceso penal.

La obligación estatal de sancionar proporcionalmente las violaciones de los derechos humanos

La obligación estatal de sancionar las personas responsables de violaciones de los derechos humanos ha sido claramente establecida en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. La Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, que la investigación y sanción de las personas responsables es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad⁵⁹.

La obligación de sancionar las graves violaciones de derechos humanos implica la necesidad de luchar contra la impunidad y no recurrir a las amnistías, ni a otras figuras que harían nugatoria la responsabilidad individual por la comisión de estas violaciones. La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad⁶⁰, y abstenerse de recurrir a figuras legales que pretendan impedir la persecución penal o disminuir los efectos de la sentencia condenatoria⁶¹.

Esta obligación estatal de sancionar se extiende más allá de la lucha contra la impunidad y la inaceptabilidad de las amnistías, incorporando también la obligación de sancionar las graves violaciones de derechos humanos con penas proporcionales. De hecho, las amnistías son fundamentalmente un caso extremo de

54 *Id.*, art. 11(5).

55 *Id.*, art. 11(7).

56 Véase *id.*, art. 11(3).

57 Véase *id.*, art. 11(8).

58 *Id.*, art. 13 (parágrafo).

59 *Caso Myrna Mack*, *supra* nota 21, párr. 273.

60 *Caso Mapiripán*, *supra* nota 10, párr. 237, *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri*, sentencia del 8 de julio 2004, Serie C No. 110, párr. 148 y *Caso 19 Comerciantes*, *supra* nota 10, párr. 175.

61 *Id.*

falta de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad de las penas está claramente establecido en numerosos tratados internacionales—entre ellos la Convención contra la Tortura⁶², La Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio⁶³, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas⁶⁴ y la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura⁶⁵—así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana⁶⁶ y en los estatutos de la Corte Penal Internacional⁶⁷ y de los tribunales penales internacionales para Rwanda (ICTR) y el ex Yugoslavia (ICTY)⁶⁸. Al aplicar este principio de proporcionalidad, los tribunales penales internacionales han impuesto una variedad amplia de penas, considerando de manera individualizada una diversidad de factores agravantes y atenuantes⁶⁹. Las sentencias finales dictadas por el ICTY, por ejemplo, han variado desde tres a cuarenta años de prisión.

A la luz de un análisis detallado de los tratados, estatutos, jurisprudencia, y prácticas relevantes, se puede llegar a una conclusión sobre algunos de los requisitos fundamentales para sancionar proporcionalmente las violaciones graves de los derechos humanos⁷⁰. Aplicar una sanción proporcional para una violación grave de derechos humanos tiene que partir, en primer lugar, de un análisis de la gravedad del crimen

y el papel que jugó el acusado en su comisión. Segundo, tiene que haber una consideración individualizada de las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, principalmente la contribución del condenado a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas⁷¹. En el contexto de un proceso de transición, esta consideración podría tomar en cuenta además la contribución efectiva del condenado a la paz o a la reconciliación nacional, reconociendo que una contribución a la verdad, la justicia y la reparación—como las expresiones de remordimiento, el pedido de disculpas a las víctimas, o la confesión de culpabilidad—puede tener un significado particularmente importante en un contexto de transición. Tercero, tiene que existir una graduación de penas adecuada para reflejar las circunstancias diversas de los crímenes cometidos y de los factores agravantes o atenuantes que sean relevantes; debe haber consistencia entre las penas aplicadas a crímenes similares. Finalmente, la pena tiene que ser otorgada en el marco de un proceso que promueva el acceso de las víctimas o sus familiares a un recurso que les garantice verdad, justicia y reparación.

Con respecto a las sanciones, la Ley 975 establece una pena alternativa de cinco a ocho años de privación de la libertad⁷², y en varios casos puede ser reducida aún

-
- 62 Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, *entrada en vigor* 26 de Junio de 1987, art. 4(2), 1465 U.N.T.S. 85.
- 63 Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, *entrada en vigor* 12 de enero de 1951, Art. V.
- 64 Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, *entrada en vigor* 28/2/1987 ratificada por Colombia el 1º de Abril de 2005, art. III.
- 65 Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, *entrada en vigor* 28/3/1996, ratificada por Colombia el 2 de Diciembre 1998, art. 6.
- 66 Véase, por ejemplo, Corte I.D.H., *Caso Raxcacó Reyes*, Sentencia del 15 de Septiembre de 2005, Serie C No. 133, párr. 133.
- 67 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, *entrada en vigor* el 1o de Julio de 2002, art. 81(2)(a).
- 68 Véase *Statute of the International Tribunal*, U.N. SCOR, 48th Sess., Annex, at 45, art. 24(2), U.N. Doc. S/25704, S/25704/Add.1 & S/25704/Corr. 1 (1993), *aprobado por* S.C. Res. 827, U.S. SCOR, 48th Session, 3217th meeting., U.N. Doc. S/Res/827 (1993); *Statute of the International Tribunal for Rwanda*, U.N. SCOR, 49th Session, 3453d meeting., Annex, p.13, art. 23(2), U.N. Doc. S/Res/955 (1994).
- 69 Véase, por ejemplo, *Prosecutor v. Kayishema*, Case No. ICTR-95-1-T, Sentence, párr. 27, (I.C.T.R. Trial Chamber May 21, 1999); *Prosecutor v. Serushago*, Case No. ICTR-98-39-S, capítulo V., (I.C.T.R. Trial Chamber Feb. 5, 1999); *Prosecutor v. Sikirica*, Case No. IT-95-8, párrs. 239, 243 (I.C.T.Y. Trial Chamber Nov. 13, 2001). Apelación desestimada; y *Prosecutor v. Kvočka*, Case No. IT-98-30-1, párrs. 717, 722, 732 (I.C.T.Y. Trial Chamber Nov. 2, 2001). Afirmada en apelación, Case No. IT-98-30/1 (I.C.T.Y. App. Chamber Feb. 28, 2005).
- 70 Para una explicación más detallada de este análisis y del correspondiente “test” de proporcionalidad de las penas, véase Escrito Amicus Curiae de CEJIL y la Clínica de Derecho Humanos de Yale Law School, *supra* nota 7, sección V.C.3.
- 71 Por ejemplo, otorgar (o no) información sobre el paradero final de un desaparecido (verdad), cooperar (o no) con el fiscal (justicia) y expresar (o no) remordimiento (reparación). Véase, *inter alia*, anteproyecto de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; la jurisprudencia del ICTJ y del ICTR; y el estatuto de la CPI.
- 72 Ley 975 de 2005, art. 29.

más⁷³. Las penas se acumulan, lo que produce como resultado que un beneficiario de la Ley, sin tomar en cuenta la gravedad o multiplicidad de los delitos, no reciba una pena alternativa de más de ocho años⁷⁴. Para obtener la pena alternativa, el desmovilizado cuya identidad se notifica mediante una lista elaborada por el Gobierno, que es entregada a la Fiscalía General de la Nación⁷⁵, debe cumplir con las condiciones contempladas por la Ley. Dentro de los requisitos individuales se encuentran la entrega de información y la colaboración con el desmantelamiento de los grupos paramilitares⁷⁶, la suscripción de un acto de compromiso con el gobierno⁷⁷, y la entrega de “los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos”⁷⁸. El Decreto 4760 especifica además que la pena alternativa solo podrá concederse si se encuentra acreditada la contribución del beneficiario a la paz nacional, así como su colaboración con la justicia, reparación a las víctimas y adecuada resocialización⁷⁹.

Como se vio anteriormente, un análisis de la proporcionalidad de las penas aplicables a graves violaciones de derechos humanos tiene que considerar varios factores. En primer lugar, aplicar una sentencia proporcional requiere evaluar la gravedad del crimen cometido y el papel que desempeñó el implicado en su autoría. Mientras algunos implicados podrían recibir sentencias apropiadas a la gravedad de sus crímenes dentro del rango de cinco a ocho años, otras sentencias podrían carecer de proporcionalidad en los casos de condenados que hayan cometido violaciones atroces. Bajo la Ley 975, aún aquellos paramilitares que hayan cometido ofensas comparables a las que fueron

castigadas con penas de cuarenta años o más por el ICTR y el ICTY no recibirán sentencias más allá de los ocho años de privación de libertad. Es significativo, en este sentido, que las sentencias emitidas conforme a la Ley incluirán la pena principal además de la pena alternativa aplicable⁸⁰, comunicando así a las víctimas y a la sociedad el nivel de condena que hubiera merecido la conducta delictiva. No obstante, al establecer una pena máxima de ocho años para cualquier condenado, es posible sostener que probablemente la Ley 975 garantice que numerosos perpetradores de graves violaciones de derechos humanos recibirán sentencias no proporcionales.

Adicionalmente a una consideración efectiva de la gravedad del crimen y el papel del condenado en su comisión, otorgar una pena proporcional requiere tomar en cuenta de manera individualizada las circunstancias agravantes y atenuantes, particularmente la efectiva contribución (o no) del condenado a la verdad, la justicia, y la reparación de las víctimas, así como, en un contexto de transición como el que vive Colombia, a la paz y la reconciliación nacional. Hasta cierto punto la Ley 975 y el Decreto 4760 reconocen la necesidad de evaluar esta contribución cuando establecen los requisitos de elegibilidad antes mencionados⁸¹. Sin embargo, esta lista de requisitos no representa una consideración integral de la efectiva contribución del desmovilizado, siendo particularmente preocupante la falta de mención explícita de su contribución al derecho a la verdad de las víctimas. Adicionalmente, crea preocupación el hecho que los miembros de grupos armados quienes se encuentren privados de libertad están contemplados como beneficiarios de la Ley⁸².

73 Véase Comisión Colombiana de Juristas, “Sin Garantía al Derecho a la Justicia,” 15 de junio de 2005, y Human Rights Watch, “Smoke and Mirrors: Colombia’s demobilization of paramilitary groups”, *supra* nota 41, p. 54-55. En el caso de miembros de grupos paramilitares que hayan permanecido en una zona de concentración como Santafé de Ralito el descuento podrá ser hasta de 18 meses (véase Ley 975 de 2005, art. 32), y en los casos de miembros de grupos paramilitares privados de la libertad sin condena ejecutoriada, se les reconocerá como pena cumplida todo el tiempo que estuvieron bajo detención.

74 Ley 975 de 2005, art. 20.

75 *Id.*, art. 10. Decreto 4760 de 2005, art. 3.

76 Ley 975 de 2005., art. 11(1).

77 *Id.*, art. 11(2).

78 *Id.*, art. 11(5).

79 Decreto 4760 de 2005, art. 8.

80 *Id.*

81 Véase Ley 975 de 2005, arts. 10 y 11, y Decreto 4760 de 2005, art. 8.

82 Decreto 4760 de 2005, art. 3. Véase también, “Decreto que reglamenta ley de Justicia y Paz es banderazo para excarcelación masiva de paramilitares,” *El Tiempo*, 7 de enero de 2005.

Es razonable dudar que muchos de ellos—separados del campo de batalla y pagando por sus crímenes—puedan contribuir a la verdad y la reparación, a la paz, y a la reconciliación de una forma tal que se justifique reemplazar sus sentencias condenatorias por una pena alternativa.

Otro requisito que se necesita para otorgar una pena proporcional es la graduación adecuada de las penas para reflejar los distintos bienes jurídicos afectados y las circunstancias particulares de cada crimen y autor. No obstante, el rango de penas entre cinco y ocho años establecido por la Ley 975 es demasiado estrecho para reflejar la gran variedad de crímenes que los beneficiarios de la Ley hayan cometido así como los papeles que hayan jugado en su comisión y las circunstancias particulares atenuantes y agravantes. Aunque la Ley establece que la sentencia fijada dependerá de la seriedad de la violación y la cooperación del condenado⁸³, el rango estrecho de penas posibles no permite que el castigo realmente refleje las variaciones individuales en la conducta delictiva y las circunstancias individuales del condenado.

Finalmente, una pena proporcional tiene que ser otorgada en el marco de un proceso que promueve el acceso de las víctimas o sus familiares a un recurso que les garantice verdad, justicia y reparación. Al respecto, cabe hacer referencia a los argumentos desarrollados en las secciones anteriores sobre el derecho a la verdad y el acceso al proceso penal, y la sección que sigue sobre el derecho a la reparación, para concluir que los recursos otorgados a las víctimas para resaltar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación son insuficientes y contribuyen a hacer desproporcionales las penas establecidas por la Ley 975.

En conclusión, la Ley 975 de 2005 establece penas demasiado breves y dentro de un rango excesivamente estrecho, factores que impiden considerar la gravedad del crimen y las circunstancias individuales de cada condenado. Adicionalmente, la Ley no contempla mecanismos que garanticen realmente a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por último, el procedimiento establecido por la Ley 975 no permite considerar individual e integralmente la contribución efectiva de cada condenado a la paz y reconciliación nacional y a los derechos de las víctimas. Por todos estos argumentos, la Ley viola la obligación estatal de sancionar proporcionalmente las graves violaciones de los derechos humanos.

El derecho a la reparación

En el derecho internacional está establecida la obligación de reparar los daños causados a otros sujetos del derecho internacional. La Corte Interamericana ha afirmado, por ejemplo, que es un principio del derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente⁸⁴. De acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención Americana, el Estado tiene la obligación de reparar los daños causados por una violación de los derechos humanos protegidos por la Convención⁸⁵. Estas reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas⁸⁶.

El concepto de reparación definido por la Corte Interamericana comprende no solo la indemnización compensatoria por los daños materiales y morales, sino, también, y de un modo fundamental, la reparación del daño a la dignidad de la víctima, y a la “sociedad como un todo”⁸⁷. Las medidas otorgadas con este fin son las

83 Ley 975 de 2005, art. 29.

84 Corte I.D.H., *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*, *supra* nota 23, párr. 133. Véase también Corte I.D.H., *Caso Lori Berenson Mejía*, sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No. 119, párr. 230: “es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.”

85 *Caso Serrano Cruz*, *supra* nota 23, párr. 134.

86 *Id.*, párr. 135.

87 El término ha sido introducido por la Comisión Interamericana, véase Corte I.D.H., *Caso Caballero Delgado y Santana*, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 21. La Corte lo asumió en el Corte I.D.H., *Caso Trujillo Oroza*, Reparaciones, Sentencia del 27 de febrero de 2002, Serie C. No. 92, párr. 110. Véase también Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, E/CN.4/2005/35.

medidas de satisfacción y las garantías de no-repetición⁸⁸. De esta forma, una reparación integral debe incluir medidas como la publicación de la verdad sobre lo sucedido, la ubicación de los cuerpos o restos de los desaparecidos, y las garantías de no-repetición.

Refiriéndose a las víctimas del conflicto colombiano, la Comisión Interamericana ha resaltado que ellas tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, que debe materializarse a través de medidas individuales de restitución, indemnización y rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, que permitan reestablecer su situación, sin discriminación⁸⁹.

La Ley 975 define la restitución⁹⁰, indemnización⁹¹, rehabilitación⁹², las medidas de satisfacción y garantías de no-repetición⁹³, y establece expresamente el derecho de las víctimas a “una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito”⁹⁴, o en caso que no se pueda individualizar al autor del delito, a cargo del Fondo de Reparación⁹⁵. A pesar de que estos principios están en concordancia con lo que contempla el derecho internacional, existen serias dudas sobre la capacidad del sistema de reparaciones establecido por la Ley 975 de hacerlos efectivos.

Mientras el concepto de reparaciones establecido por la Corte Interamericana se basa en el derecho de la víctima, inmodificable por disposiciones de derecho interno, de ser reestablecida—en lo posible—a su situación previa a la violación⁹⁶, la Ley 975 condiciona la reparación de las víctimas fundamentalmente a la voluntad de los victimarios de entregar sus bienes ilícitos⁹⁷. Aunque la Ley contempla un papel para el Estado en las medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición⁹⁸, y crea un mecanismo subsidiario a través del cual el Estado puede contribuir a la indemnización de las víctimas⁹⁹, no establece claramente que la obligación general de reparar adecuadamente es una obligación que compete al Estado cada vez que haya un daño causado por la acción u omisión de sus agentes. Dada su naturaleza de ley penal, la Ley 975 contempla la reparación principalmente como medida individual. Sin embargo—y con independencia de los esfuerzos del Estado de hacer contribuir a la reparación a los particulares responsables del daño—una ley que trata de la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionados por crímenes cometidos por los grupos armados ilegales (entre ellos, los grupos paramilitares) no puede ignorar la obligación que cabe al propio Estado de reparar dichas violaciones.

88 Corte I.D.H., *Caso Molina Theissen*, Reparaciones, Sentencia del 3 de julio de 2004, Serie C, No. 108, párr. 77, así como *Caso Masacre Plan de Sánchez*, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia del 19 de noviembre de 2004, Serie C No. 116, párr. 93.

89 Comisión I.D.H., Informe sobre desmovilización en Colombia 2004, *supra* nota 10, párr. 6.

90 Ley 975 de 2005, art. 46.

91 *Id.*, art. 8.

92 *Id.*, art. 47.

93 *Id.*, art. 48.

94 *Id.*, art. 37.

95 *Id.*, art. 42.

96 Véase *Caso Moiwana*, *supra* nota 33, párr. 170.

97 Véase, por ejemplo, OACDHC, Comunicado de Prensa, “Consideraciones sobre la Ley de ‘Justicia y Paz’,” 27 de junio de 2005: Básicamente, la Ley hace depender la reparación, por parte de los victimarios, de los bienes y recursos que éstos quieran declarar y entregar. Pone la carga para obtener reparaciones sobre las víctimas, sin darles el apoyo adecuado del Estado en el proceso judicial. Además, aborda insuficientemente la responsabilidad estatal de reparar en los casos que directamente le corresponde. Tampoco cubre la responsabilidad que tiene el Estado de esforzarse por asegurar la reparación en los casos en que los victimarios no cumplan o no puedan cumplir con la reparación.

No obstante, el Decreto 4760 de 2005 en su artículo 8 establece que el Tribunal Superior de Distrito Judicial debe realizar un estricto seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia, y que la inobservancia de cualquiera de tales obligaciones conlleva la revocatoria del beneficio de pena alternativa. Para poder beneficiarse de la pena alternativa, el desmovilizado tiene que cumplir los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, incluyendo la entrega de los bienes producto de la actividad ilícita. Así, es lógico concluir que los jueces deben recovar la pena alternativa si encuentran que un desmovilizado no ha entregado un bien ilícitamente adquirido. Si de esta manera estricta hacen seguimiento al cumplimiento de sentencias, los jueces podrán contribuir sustancialmente a incentivar la entrega de bienes por parte de los desmovilizados.

98 Véase Ley 975 de 2005, arts. 47 y 48. Véase también, Decreto 4760 de 2005, art. 12.

Con respecto a la restitución, se ha establecido que los paramilitares en Colombia han logrado concentrar “una enorme cantidad de tierra” en las zonas de conflicto armado, con el resultado de que hoy en día se habla de “una contrarreforma agraria que han hecho los paramilitares”¹⁰⁰. Otra cantidad de bienes ilícitamente adquiridos ha sido objeto de un gran esfuerzo de lavado, y hoy se encuentra en manos de terceros, muchas veces de buena fe¹⁰¹. Restituir estos bienes es uno de los retos más formidables que enfrentan los fiscales, uno que en no pocos casos será imposible cumplir, dejando a muchas víctimas sin reparación adecuada. Recurrir a la restitución directa de los bienes y tierras que han adquirido los paramilitares casi seguramente terminará siendo insuficiente para enfrentar este enorme problema de contrarreforma agraria, dando lugar a la necesidad de un mayor papel del Estado para resolverlo.

Adicionalmente, garantizar la no-repetición de las violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos paramilitares, no será posible sin entender las estructuras paramilitares, sus redes de apoyo y sus fuentes financieras, incluso sus conexiones con la fuerza pública. Al respecto, la aplicación general del principio de oportunidad a los testaferros de los paramilitares¹⁰², obstaculiza la tarea de descubrir y dismantelar sus redes de colaboración. Adicionalmente, el papel de instituciones del mismo Estado en fomentar y mantener el fenómeno paramilitar ha sido ampliamente documentado¹⁰³. Garantizar la no repetición de ese fenómeno necesariamente implica precisar el rol de la fuerza pública en el mismo e

implementar las reformas necesarias para impedir la continuación o regeneración de la colaboración perversa que dio lugar al paramilitarismo¹⁰⁴. Frente a fuertes señalamientos que dicha colaboración sigue hoy en día¹⁰⁵, el Estado colombiano tiene la obligación de depurar las instituciones militares, policiales, y de inteligencia, cambiar su lógica de funcionamiento contrainsurgente, e instalar en ellas una cultura de respecto de los derechos humanos.¹⁰⁶

En este sentido, el Decreto 4760 establece que el Gobierno Nacional llevará a cabo acciones de reparación colectiva que tiendan a la satisfacción y garantía de no repetición, teniendo en cuenta las recomendaciones que en tal sentido formule la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación¹⁰⁷. Entre estas acciones, el Decreto menciona la de recuperar la institucionalidad en las zonas más afectadas por la violencia¹⁰⁸. Esto es importante en la medida que reconoce que uno de las fuentes de las violaciones de los derechos humanos ha sido la ausencia del aparato del Estado en zonas amplias del país; extender las instituciones del Estado a estas zonas es clave para garantizar la no repetición. No obstante, otra fuente de dichas violaciones—y en el caso de los grupos paramilitares, una fuente probablemente más relevante—fue la manera en que las instituciones del Estado (particularmente las fuerzas públicas) realizaron sus actividades. Genera bastante preocupación que ni la Ley ni el Decreto hacen mención de la reforma de estas instituciones estatales como garantía de no repetición.

99 El Fondo para la Reparación de las Víctimas incluirá, además que los bienes que se entreguen los beneficiarios de la Ley, “recursos provenientes del presupuesto nacional.” Véase Ley 975 de 2005, art. 54.

100 Mauricio García Villegas, “Las tierras de los desplazados,” *www.semana.com*, 18 de octubre de 2005. Según estimados del Incora los narcotraficantes se han apoderado del 48% de las mejores tierras del país.

101 Por ejemplo, el actual jefe de las AUC Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, manifestó ante la Fiscalía ser dueño únicamente de “una casa en Medellín, de una finquita y de algunas cabezas de ganado”, a pesar de que es un conocido narcotraficante considerado por los organismos de seguridad como uno de los hombres con mayores riquezas entre los paramilitares. “Berna niega crimen por segunda vez”, *El Tiempo*, 20 de agosto de 2005. A nivel más general, se ha detectado una “operación de lavado a gran escala” por parte de los paramilitares para “ocultar sus fortunas a la Ley de Justicia y Paz.” Véase, “Lavado de activos a gran escala por parte de ‘narcos’, ‘paras’ y guerrilla amenaza economía del país,” *El Tiempo*, 11 de septiembre de 2005.

102 Decreto 4760 de 2005, art. 13 (parágrafo).

103 Véase nota 10, *supra*.

104 Véase *Caso Myrna Mack*, *supra* nota 21, párrs. 281-284.

105 Véase, por ejemplo, “El DAS y los paras: SEMANA revela pruebas de cómo las autodefensas tienen infiltrado el principal organismo de inteligencia del país,” *Semana*, 31 de octubre de 2005.

106 Véase, Carlos Martín Beristain, “Reconciliación y democratización en América Latina: un análisis regional,” *supra* nota 18, p. 60.

107 Decreto 4760 de 2005, art. 12.

108 *Id.*

En conclusión, la Ley 975 ha sido concebida de tal manera que pone en riesgo el cumplimiento del Estado colombiano de la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares. En vez de basar el sistema de reparaciones en la obligación de restaurar a la víctima a su situación anterior a la violación, la Ley lo basa en la voluntad de los victimarios y no enfrenta la necesidad de un papel fuerte del propio Estado en esta materia. La Ley no establece cambios institucionales para responder al papel clave que jugó la fuerza pública en el desarrollo del fenómeno paramilitar, negando así un elemento esencial para garantizar la no repetición de este fenómeno. Por todo ello, y por el preocupante hecho de no reconocer explícitamente la obligación de reparar del mismo Estado, la Ley 975 no logra garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a una reparación adecuada.

Conclusiones y Recomendaciones

En la actual transición que vive Colombia, garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación estatal claramente establecida por el derecho internacional de los derechos humanos. Lejos de ser incompatible con un proceso de paz, garantizar estos derechos es un paso fundamental para el éxito de dicho proceso y la estabilidad del nuevo orden social y político¹⁰⁹.

La consolidación de una democracia inclusiva, una institucionalidad fuerte y legítima, y un estado de derecho en Colombia depende en gran medida de los logros del proceso de transición en materia de verdad, justicia y reparación. Tras medio siglo de conflicto armado, cerrar el círculo vicioso de violencia, reconstruir el tejido social y crear una cultura de paz será imposible sin reconocer, sancionar y reparar el daño causado a los millones de víctimas. Colombia debe buscar, en vez de una paz minimalista y precaria marcada por la mera ausencia o reducción de conflicto entre grupos armados, una paz que surge de una nueva realidad sociopolítica: una transición hacia la paz a través de la transición a una democracia inclusiva, institucional y profunda. Avanzar hacia esta realidad

implica, necesariamente, enfrentar el pasado y reconocer la dignidad humana de las víctimas del conflicto—particularmente las que han sufrido desproporcionalmente: campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, niños y niñas, adolescentes, miembros de sociedad civil, y otros—divulgando la verdad sobre lo que sufrieron, aplicando la justicia a los que causaron el daño, y reparando a las víctimas adecuadamente.

Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación son reconocidos por la Ley 975 de 2005, que regula el procedimiento mediante el cual los miembros de grupos armados al margen de la ley ya procesados o condenados por violaciones de los derechos humanos pueden desmovilizarse¹¹⁰. Sin embargo, el análisis de esta norma que ha realizado CEJIL muestra que el proceso establecido por la Ley 975 no logra garantizar a las víctimas estos derechos fundamentales.

En la medida en que la Ley 975 de 2005 y el Decreto 4760 de 2005 no cumplen con las obligaciones internacionales del Estado colombiano, el Estado tiene la obligación de ajustar el marco normativo de la desmovilización así como su implementación a los estándares que protegen y garantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En el ánimo de contribuir a este proceso, CEJIL presenta unas recomendaciones de carácter general, entendiendo que de aquellas es posible derivar otras sugerencias específicas claves para el avance del proceso. Consideramos que es posible concretar estas recomendaciones en diversos mecanismos procesales e institucionales que garanticen los estándares básicos del derecho internacional de los derechos humanos. En ese espíritu presentamos las siguientes **recomendaciones básicas** como punto de partida:

- Sobre el derecho a la verdad
 - Condicionar la concesión de beneficios penales como la reducción de penas a una confesión plena del desmovilizado, que explicita su cooperación real y eficaz. El Estado debe garantizar que esta

109 Véase Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon, “Justicia Transicional y Justicia Restaurativa,” en Angelika Rettber, compiladora, *Entre el Perdón y el Paredón*, 2005, p. 229.

110 Ley 975 de 2005, arts. 1, 4.

colaboración eficaz se mantenga después que el desmovilizado ha confesado.

Garantizar explícitamente a las víctimas la capacidad de actuar en todas las etapas de la investigación y del juicio correspondiente, en ejercicio de su derecho a conocer la verdad.

- Sobre el derecho a la justicia

Utilizar todo mecanismo necesario—incluyendo la posibilidad de recibir la versión libre en varias audiencias—para garantizar investigaciones eficaces de las violaciones de derechos humanos.

Garantizar el derecho de las víctimas de tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas de la investigación y el juicio correspondiente, superando cualquier ambigüedad sobre el código procesal penal aplicable.

Establecer un rango de penas suficientemente amplio para garantizar sanciones proporcionales a las circunstancias individuales de cada crimen y autor, incluso los factores atenuantes y agravantes relevantes. Los tribunales encargados de adelantar los juicios y dictar sentencias deben realizar rigurosamente su tarea de evaluar el cumplimiento del desmovilizado de los requisitos de la Ley.

- Sobre el derecho a la reparación

Establecer claramente que el derecho a la

reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos impone una obligación al Estado de reestablecer a la víctima—en lo posible—a su situación anterior a la violación. Cuando hay responsabilidad estatal por el daño sufrido, la obligación de reparar es una obligación del Estado, con independencia de los esfuerzos para hacer contribuir a la reparación a los particulares responsables del daño. En particular, el Estado debe tomar un mayor interés y papel en cuanto a la restitución de tierras y otros bienes perdidos por las víctimas, considerando la elaboración de una ley, debidamente consultada y concertada con las víctimas, que trate específicamente este tema.

Garantizar que el estudio que se realice sobre las razones que explican el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, analice expresamente el papel del Estado en el desarrollo del fenómeno paramilitar y recomiende las reformas institucionales necesarias para garantizar su no repetición. Si es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación contemplada por la Ley 975 la que finalmente realiza este estudio, esta Comisión debería incorporar al estudio un análisis del papel del Estado y las recomendaciones correspondientes sobre reformas institucionales.

ANEXO I

DIARIO OFICIAL 45.980

LEY 975 DE 2005

(julio 25)

por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPITULO I

Principios y definiciones

Artículo 1°. *Objeto de la presente ley.* La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.

Artículo 2°. *Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa.*

La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.

La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.

Artículo 3°. *Alternatividad.* Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 4°. *Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso.* El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.

Artículo 5°. *Definición de víctima.* Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se

identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la

Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.

Artículo 6°. *Derecho a la justicia.* De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones. Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.

Artículo 7°. *Derecho a la verdad.* La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.

Artículo 8°. *Derecho a la reparación.* El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

Artículo 9°. *Desmovilización.* Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente.

La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.

CAPITULO II Aspectos preliminares

Artículo 10. *Requisitos de elegibilidad para la desmovilización*

colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente

ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:

10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.

10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.

10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.

Artículo 11. *Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual.* Los miembros de los grupos armados organizados al

margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.

11.4 Que cese toda actividad ilícita.

11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.

11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.

CAPITULO III Principios procesales

Artículo 12. *Oralidad.* La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna.

La conservación de los registros corresponderá al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial que conozca del juzgamiento, según corresponda.

Artículo 13. *Celeridad.* Los asuntos que se debatan en audiencia

serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados. Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que designe el Tribunal respectivo.

En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:

1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos.

3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita.
5. La formulación de la imputación.
6. La formulación de cargos.
7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.

Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de desestimación de las pretensiones de las partes.

El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación en el correspondiente despacho.

Artículo 14. Defensa. La defensa estará a cargo del defensor de confianza que libremente designe el imputado o acusado o, en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio.

La protección de los testigos y los peritos que pretenda

presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.

CAPITULO IV Investigación y juzgamiento

Artículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros

de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para:

16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.

16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización. El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ, mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley. No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial.

Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su

desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.

Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. Razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas.

A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso

solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar. Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.

Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización.

Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento. Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena.

Parágrafo 1º. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas.

Parágrafo 2º. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 20. Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley. Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a

un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley.

Artículo 21. *Ruptura de la unidad procesal.* Si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso la investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las leyes procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente ley.

Artículo 22. *Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización.* Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.

Artículo 23. *Incidente de reparación integral.* En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediately el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única

pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.

Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oírá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.

Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.

Artículo 24. *Contenido de la sentencia.* De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.

La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.

Artículo 25. *Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto.* Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin

perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley. Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.

Artículo 26. Recursos. Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.

El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda. Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, se declarará desierto.

Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, excepto lo relacionado con acciones de tutela.

Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente.

Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación.

Artículo 27. Archivo de las diligencias. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal.

Artículo 28. Intervención del Ministerio Público. En los términos del artículo 277 de la Constitución Política, el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

CAPITULO V Pena alternativa

Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal. En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.

Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente

ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia. Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.

Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa.

CAPITULO VI

Régimen de la privación de la libertad

Artículo 30. *Establecimiento de reclusión.* El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva. Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec. La pena podrá cumplirse en el exterior.

Artículo 31. *Tiempo de permanencia en las zonas de concentración.* El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses. El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados de que trata la presente ley.

CAPITULO VII

Instituciones para la ejecución de la presente ley

Artículo 32. *Competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia*

y paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados. Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido.

Artículo 33. *Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz.* Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con competencia nacional e integrada en la forma que se señala en la presente ley.

Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias que por razón de su competencia, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los procedimientos establecidos en la presente ley.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial, conformada por miembros de las autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional.

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la

Nación, para el año 2005 establecida en el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos:

150 Investigador Criminalístico VII

15 Secretario IV

15 Asistente Judicial IV

20 Conductor III

40 Escolta III

15 Asistente de Investigación Criminalística IV

20 Asistente de Fiscal II.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado ante Tribunal

Artículo 34. Defensoría pública. El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley. La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley.

Artículo 35. Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. El Procurador General de la Nación creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Artículo 36. Participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. Para el cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la Procuraduría General de la Nación, impulsará mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas.

CAPITULO VIII Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia

Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

38.1[sic]1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno.

38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que resulten amenazadas.

38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.

38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.

38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de

los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas.

38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.

38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente ley.

38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación.

38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en

el evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios a

los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso.

Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.

Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan con este tipo de víctimas.

Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

Artículo 39. Excepción a la publicidad en el juicio. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias de juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin de proteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio a través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y confrontación por las partes. En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo.

Artículo 40. Otras medidas de protección durante el proceso.

Cuando la publicidad de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida entrañe peligro grave para la seguridad de un

testigo o de su familia, el Fiscal deberá abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio. En su reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento.

En ningún caso, esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

Artículo 41. *Atención a necesidades especiales.* Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.

CAPITULO IX

Derecho a la reparación de las víctimas

Artículo 42. *Deber general de reparar.* Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueron condenados mediante sentencia judicial.

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.

Artículo 43. *Reparación.* El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes.

Artículo 44. *Actos de reparación.* La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción. Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo

con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.

Son actos de reparación integral los siguientes:

45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas.

45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.

45.3 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles.

45.4 La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas.

45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.

Artículo 45. *Solicitud de reparación.* Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento. Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto.

Artículo 46. *Restitución.* La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.

Artículo 47. *Rehabilitación.* La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.

Artículo 48. *Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.*

Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades

directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:

49.1 La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.

49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

49.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.

49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley.

49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas.

49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos.

49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Artículo 49. *Programas de reparación colectiva.* El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas

más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.

Artículo 50. *Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.*

Créase la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado, quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará la Secretaría Técnica.

El Presidente de la República designará como integrantes de esta Comisión a cinco personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres.

Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.

Artículo 51. *Funciones de la comisión nacional de reparación y reconciliación.* La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones:

52.1 Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.

52.2 Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.

52.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios. Para estos efectos la Comisión Nacional Reparación y Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades extranjeras.

52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución.

52.5 Presentar, dentro del término de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, ante el

Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

52.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.

52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.

52.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.

52.9 Darse su reglamento.

Artículo 52. *Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.* Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.

Artículo 53. *Composición.* Las Comisiones Regionales estarán integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital; un (1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.

El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las comunidades religiosas y determinará, de acuerdo con las necesidades del proceso, el funcionamiento y distribución territorial de las comisiones.

Artículo 54. *Fondo para la Reparación de las Víctimas.* Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado. El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras. Los recursos

administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observará respecto de los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.

Artículo 55. *Funciones de la Red de Solidaridad Social.* La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes funciones:

56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional.

56.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas.

56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar.

56.4 Las demás que señale el reglamento.

CAPITULO X

Conservación de archivos

Artículo 56. *Deber de memoria.* El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado.

Artículo 57. *Medidas de preservación de los archivos.* El derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo

anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes.

Artículo 58. *Medidas para facilitar el acceso a los archivos.* El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.

Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.

En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.

CAPITULO XI Acuerdos Humanitarios

Artículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la Constitución Política, habida consideración de la situación de orden público que vive el país y la amenaza contra la población civil y las instituciones legítimamente constituidas.

Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la República podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelantar contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley.

Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.

El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.

CAPITULO XII Vigencia y disposiciones complementarias

Artículo 62. *Complementariedad.* Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 63. *Ley futura más favorable.* Si con posterioridad a la promulgación de la presente ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores.

Artículo 64. *Entrega de menores.* La entrega de menores por parte de miembros de Grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002.

Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación apropiarán los recursos suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de la ley de extinción de dominio.

Artículo 66. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos. Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión social y adopción a la normal vida cotidiana.

Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos para

desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.

Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte Suprema de justicia, tendrán prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Corporación y deberán ser resueltos dentro del término de treinta días.

Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las condiciones establecidas en el presente artículo, también podrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.

Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.

Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas.

Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del Código

Penal un inciso del siguiente tenor: “También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.

Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993”.

Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Defensa Nacional,
Camilo Ospina Bernal.

Anexo II

DIARIO OFICIAL 46.137

DECRETO 4760 DE 2005

(diciembre 20)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005.

El Presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 189-11 de la Carta Política y por la Ley 975 de 2005,
DECRETA:

Generalidades

Artículo 1°. *Ambito de aplicación.* Las conductas delictivas cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al grupo, que no queden cobijadas por la Ley 782 de 2002, podrán ser investigadas y juzgadas por el procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005 cuando hayan sido realizadas antes del 25 de julio de 2005, siempre que los desmovilizados se encuentren en los listados que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan además los requisitos de elegibilidad de que tratan los artículos 10 y 11 de la misma, según corresponda.

En todo caso, el otorgamiento de los beneficios jurídicos contemplados por la Ley 782 de 2002 para los delitos políticos y conexos no excluye la responsabilidad penal por las demás conductas punibles, la cual podrá hacerse efectiva mediante el procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005 o por el previsto en las leyes vigentes al momento de su comisión cuando aquel no sea procedente de conformidad con los requisitos legales.

Artículo 2°. *Marco interpretativo.* La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 975 de 2005 deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados

internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la citada ley no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.

En lo no previsto de manera específica por la Ley 975 de 2005 se aplicarán las normas de procedimiento penal contenidas en la Ley 906 de 2004 y, en lo compatible con la estructura del proceso regulado por aquella, lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como la Ley 793 de 2002 y las normas civiles en lo que corresponda.

Artículo 3°. *Lista de postulados.* Las listas de postulados para acceder al procedimiento de que trata la Ley 975 de 2005 que remita el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación podrán integrarse con los nombres e identidades de los miembros de los grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado colectivamente de conformidad con la Ley 782 de 2002. Tratándose de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, una vez surtida la desmovilización del grupo armado al margen de la ley, el miembro representante informará por escrito al Alto Comisionado sobre la pertenencia al mismo de quienes se encuentren privados de la libertad, la cual en su oportunidad será determinada en la respectiva providencia judicial.

También podrá incluir en las listas a quienes se hayan desmovilizado voluntariamente de manera individual de conformidad con la Ley 782 de 2002, siempre que contribuyan a la consecución de la paz nacional y hayan entregado información o colaborado

para el desmantelamiento del grupo al que pertenecían y suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

En todo caso será necesario que los desmovilizados hayan manifestado previamente y por escrito ante el Alto Comisionado para la Paz o al Ministro de Defensa, según se trate de desmovilizados colectiva o individualmente, su voluntad de ser postulados para acogerse al procedimiento y beneficios previstos por la Ley 975 de 2005 y declaren bajo la gravedad del juramento su compromiso de cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 10 y 11 de esta, según corresponda.

Las listas de postulados serán enviadas al Ministro del Interior y Justicia por el Alto Comisionado para la Paz, y por el Ministro de Defensa, según sea el caso. El Ministerio del Interior y Justicia las remitirá formalmente a la Fiscalía General de la Nación.

En ningún caso la postulación realizada por el Gobierno Nacional implica la concesión automática de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005 ni el aval sobre el cumplimiento de los requisitos allí contemplados.

La verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad corresponderá a las autoridades judiciales, quienes contarán con la colaboración que deberán prestar los demás organismos del Estado, dentro del ámbito de sus funciones. En todo caso, la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial de que trata la Ley 975 de 2005 es la instancia competente para conceder los beneficios consagrados en la citada ley, exclusivamente a quienes cumplan las exigencias previstas en los artículos 1°, 3°, 10, 11, 24, 29, 42 y 44 y demás contempladas en la misma.

Parágrafo 1°. Si durante la desmovilización colectiva o individual, los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley realizan actos de cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 10.2, 10.3 o 10.6 del artículo 10 y 11.5 del artículo 11 de la citada ley, se levantará un acta suscrita por quien certifica la desmovilización.

Tratándose de entrega de bienes, tal situación se pondrá en conocimiento inmediato de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adopten las medidas cautelares del caso y se dejen a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto.

El acta, junto con los demás medios probatorios establecidos en la ley, servirá para verificar el cumplimiento de tales requisitos.

Parágrafo 2°. Para efectos de apoyar los procesos de identificación e individualización, que deban adelantar las autoridades competentes, de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que se incluyan en la lista de que trata el presente artículo, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará su identificación con ocasión de la desmovilización surtida de conformidad con la Ley 782 de 2002, o si es del caso con posterioridad a ella. Las autoridades administrativas prestarán la colaboración del caso.

Parágrafo 3°. Los menores que se encuentren entre los integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley, serán destinatarios de las medidas para promover su recuperación física, psicológica y su reinserción social, las cuales estarán a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante el cual deberán ser puestos a disposición inmediata.

Artículo 4. *Actuaciones previas a la recepción de versión libre.* Recibida la lista de postulados enviada por el Gobierno Nacional, el Fiscal Delegado competente asignado, previamente a la recepción de la versión libre, realizará las actividades tendientes a la averiguación de la verdad material, la determinación de los autores intelectuales, materiales y partícipes, el esclarecimiento de las conductas punibles cometidas, la identificación de bienes, fuentes de financiación y armamento de los respectivos grupos armados organizados al margen de la ley, así como los cruces de información y demás diligencias tendientes al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 durante el plazo razonable que se requiera para el efecto, que no podrá exceder del término de seis (6) meses previsto en el artículo 325 de la Ley 600 de 2000.

La información y los elementos materiales probatorios legalmente obtenidos en desarrollo de las actuaciones previas, podrán ser aportados en la etapa de juzgamiento y valorados por la Sala del Tribunal de Distrito Judicial de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 5°. *Versión libre y confesión.* Para la aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, será necesario que se rinda versión libre por parte de los desmovilizados. Esta diligencia procederá independientemente de la situación jurídica del miembro del grupo armado organizado al margen de la ley, de la forma en que se haya desmovilizado o de cualquier otra consideración.

El Fiscal Delegado competente asignado recepcionará la versión libre una vez recibida la lista presentada por el Gobierno Nacional y antes del vencimiento del término previsto en el artículo anterior. Para el efecto, los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento, previas las advertencias constitucionales y legales.

En presencia del abogado defensor escogido por él, o en su defecto el que le haya asignado la Defensoría Pública para esta diligencia, el Fiscal Delegado le advertirá al desmovilizado que se encuentra libre de apremio, que no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad y le informará todo aquello que considere pertinente para garantizar su consentimiento en la realización de la versión con un conocimiento informado y su derecho al debido proceso, luego de lo cual el desmovilizado manifestará libre y voluntariamente todos los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos se realizaron, su fecha de ingreso al grupo, y toda otra circunstancia que contribuya de manera efectiva a obtener la verdad, e igualmente indicará los bienes producto de la actividad ilegal. El desmovilizado podrá renunciar al derecho de no autoincriminarse.

El Fiscal General de la Nación, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 938 de 2004, impartirá instrucciones generales a la Unidad de Justicia y Paz conducentes al eficaz desarrollo de la diligencia de versión libre y en general a la adecuada formulación del programa metodológico para el ejercicio de la función investigativa a cargo de esta dependencia.

La diligencia de versión libre podrá desarrollarse en varias audiencias, y a petición del desmovilizado habrá lugar a la ampliación de la versión rendida.

La información recaudada en la diligencia de versión libre tendrá plenos efectos probatorios y podrá aportarse en la etapa de juzgamiento, siempre que con ello no se menoscaben las garantías consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política.

Parágrafo. Cuando el desmovilizado que no registre orden o medida restrictiva de la libertad, durante la versión libre confiese delito de competencia de los Jueces penales del circuito especializado, de inmediato será puesto a disposición del Magistrado de Control de Garantías en el establecimiento de reclusión determinado por el Gobierno Nacional. A partir de este momento queda suspendida la versión libre, y el magistrado, a solicitud del fiscal delegado, dispondrá de un máximo de 36 horas para fijar y realizar la audiencia de formulación de imputación, en la cual igualmente se resolverá sobre la medida de aseguramiento y medidas cautelares solicitadas. Cumplida la audiencia de formulación de imputación se reanudará la diligencia de versión libre y una vez agotada esta, la Fiscalía podrá solicitar otra audiencia preliminar para ampliar la formulación de imputación si surgieren nuevos cargos.

Cuando el desmovilizado se encuentre previamente privado de la libertad, en virtud de la medida de aseguramiento o sentencia condenatoria o en el evento previsto en el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, las treinta y seis (36) horas a que se refiere el artículo 17 de la misma se contarán a partir de la solicitud del Fiscal Delegado al magistrado de control de garantías para la programación de la audiencia de formulación de imputación.

Artículo 6°. *Término para la formulación de cargos.* De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 975 de 2005, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la realización de la audiencia de formulación de imputación, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.

El magistrado de control de garantías podrá prorrogar el término citado hasta por el previsto en el artículo 158 de la Ley 906 de 2004, siempre que lo soliciten el Fiscal delegado o el imputado y se den las condiciones allí establecidas.

Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar.

Artículo 7°. *Acumulación de procesos.* De conformidad con el artículo 20 de la Ley 975 de 2005, para los efectos procesales se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si el desmovilizado se encuentra privado de la libertad en virtud de medida de aseguramiento dictada en otro proceso, recibida la lista de postulados elaborada por el Gobierno Nacional, el Fiscal Delegado asignado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, una vez cumplidas las averiguaciones de que trata el artículo 4° del presente decreto y obtenidas las copias pertinentes de la otra actuación procesal, le recibirá versión libre. A partir de esta diligencia, el Fiscal Delegado dejará al desmovilizado a disposición del Magistrado de Control de Garantías y se suspenderá, en relación con el sindicado o imputado, el proceso en

el cual se había proferido la medida de aseguramiento hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005. La formulación de cargos incluirá aquellos por los cuales se ha impuesto medida de aseguramiento en el proceso suspendido siempre y cuando se relacionen con conductas punibles cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Declarada la legalidad de la aceptación de los cargos por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la actuación procesal suspendida se acumulará definitivamente al proceso que se rige por la Ley 975 de 2005 respecto del imputado. Sin embargo, en caso que el imputado no acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario judicial competente para la reanudación del proceso suspendido.

Mientras se encuentre suspendido el proceso judicial ordinario no correrán los términos de prescripción de la acción penal.

Artículo 8°. *Imposición, cumplimiento y seguimiento de la pena alternativa y de la libertad a prueba.* La etapa de juzgamiento conforme a la Ley 975 de 2005, deberá estar precedida por la investigación y formulación de cargos por parte del Fiscal delegado de la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, habiéndose verificado el estricto cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 10 y 11 de la citada ley, según sea el caso. En el evento en que no se encuentren acreditados los requisitos, o el imputado no acepte los cargos o se retracte de los admitidos en la versión libre, no habrá lugar al beneficio de la pena alternativa consagrada en la misma y la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas.

De conformidad con los artículos 3°, 24, 29 y 44 de la Ley 975 de 2005, el beneficio jurídico de suspensión de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia reemplazándola por una pena alternativa consistente en la privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior

a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y la colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos, únicamente podrá concederse en la sentencia si se encuentra acreditada la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas, su adecuada resocialización y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 975 de 2005, incluyendo los previstos en los artículos 10 y 11 de la misma, según sea el caso.

Igualmente se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.

En la sentencia condenatoria la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial fijará la pena principal y las accesorias que correspondan por los delitos cometidos de acuerdo con las reglas del Código Penal, y adicionalmente incluirá la pena alternativa, los compromisos de comportamiento y su duración, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación. La pena alternativa no podrá ser objeto de subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias.

Una vez cumplida la pena alternativa, junto con las condiciones impuestas en la sentencia condenatoria y las previstas en el artículo 44 de la Ley 975 de 2005, se concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta. Durante el período de libertad a prueba, el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la Ley 975 de 2005, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.

La pena ordinaria impuesta en la sentencia condenatoria conserva su vigencia durante el cumplimiento de la pena alternativa y el período de libertad a prueba, y únicamente podrá declararse extinguida cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones legales que sirvieron de base para su imposición, las

señaladas en la sentencia y las relativas al período de la libertad a prueba. En consecuencia, la inobservancia de cualquiera de tales obligaciones conlleva la revocatoria del beneficio y en su lugar el cumplimiento de la pena ordinaria inicialmente determinada en la sentencia, procediendo en este último evento los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan y computándose el tiempo que haya permanecido privado de la libertad.

La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial deberá realizar un estricto seguimiento sobre el cumplimiento de la pena alternativa, las obligaciones impuestas en la sentencia y las relativas al período de prueba. Para tal efecto, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, establecerá los mecanismos idóneos para el efecto.

Parágrafo. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, el tiempo que un miembro de un grupo armado al margen de la ley, encontrándose autorizado por el Gobierno Nacional, haya estado fuera de una zona de concentración ejerciendo labores relacionadas con el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos, se computará para efectos de la pena alternativa como si dicho tiempo hubiere permanecido en una de las mencionadas zonas.

De la orientación y asistencia legal a las víctimas

Artículo 9°. *Divulgación de los derechos de las víctimas.* De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 de la Ley 975 de 2005, el Ministerio Público conforme al artículo 118 de la Carta Política diseñará y ejecutará programas de divulgación, promoción e información general de los derechos de las víctimas.

Para tal efecto se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en lo de su competencia.

En estos programas se deberán integrar las Entidades Gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, las Organizaciones No

Gubernamentales y las Organizaciones sociales para la asistencia de las Víctimas. La Comisión Nacional de Televisión prestará su concurso en la divulgación de las campañas de que trata el presente artículo.

Artículo 10. *Asesoría a las víctimas y promoción de sus derechos.* El Ministerio Público formulará las políticas y ejecutará los programas de asesoría jurídica legal y orientación general a las víctimas de las conductas punibles cometidas por grupos armados organizados al margen de la ley sobre los derechos que les asisten por su condición en virtud de lo previsto en la Ley 975 de 2005 y adelantará las acciones encaminadas a asegurar el reconocimiento oportuno de los mismos, dentro de los respectivos procesos.

Con el fin de facilitar a las víctimas el ejercicio de tales derechos, igualmente prestará la orientación y asistencia legal a través de sus direcciones seccionales y locales.

Artículo 11. *Participación de las víctimas en los procesos judiciales.* En virtud de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, estas podrán intervenir activamente en el proceso previsto en la Ley 975 de 2005 aportando pruebas, cooperando con las autoridades judiciales, conociendo y en su caso contravirtiendo las decisiones que se adopten dentro del mismo.

Para tal efecto, entre otros aspectos, se tendrán en cuenta los siguientes:

1. Las víctimas tendrán derecho a recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno.

2. La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de la intimidad y seguridad de las víctimas, en los términos previstos por el inciso final del artículo 15 de la Ley 975 de 2005.

3. Tendrán derecho a ser oídas, a que se les facilite el aporte de pruebas, a recibir desde el primer contacto con las autoridades judiciales información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias de la conducta punible de la cual han sido víctimas.

4. A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

5. Con ocasión de su participación en el proceso, las víctimas tendrán derecho a ser asistidas por un abogado de confianza, o en su defecto, por el Ministerio Público; sin perjuicio de que puedan intervenir directamente durante todo el proceso.

6. La Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz velará por que las autoridades competentes brinden atención adecuada a las necesidades especiales de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas discapacitadas o de la tercera edad que participen en el proceso de investigación y juzgamiento de los responsables de las conductas punibles a quienes se aplique la Ley 975 de 2005, así como por el reconocimiento de las víctimas de las conductas punibles atentatorias contra la libertad, integridad y formación sexuales y adelantará las acciones requeridas para tales fines.

7. Las víctimas tendrán derecho a la reparación de los daños sufridos por las conductas punibles. Para tal efecto podrán participar en el incidente de reparación integral de que trata el artículo 23 de la misma, el cual se surtirá a petición de la víctima, sea directamente o por conducto de la Procuraduría judicial, o a solicitud del Fiscal del caso y en él tendrán derecho a presentar sus pretensiones.

8. A ser informadas sobre la decisión definitiva adoptada por las autoridades judiciales competentes con ocasión de la investigación y juzgamiento de que trata la Ley 975 de 2005, y a controvertir las decisiones que las afecten.

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo tendrán la calidad de víctima quienes se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 5 de la Ley 975 de 2005, incluyendo a las víctimas del desplazamiento forzado ocasionado por las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Para el ejercicio de sus derechos dentro del proceso, la víctima deberá acreditar sumariamente su condición de tal, la cual, de

ser procedente, será reconocida por la autoridad judicial.

De la reparación de las víctimas

Artículo 12. *Derecho a la reparación.* Las víctimas de las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos armados al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia a los mismos, tendrán derecho a la reparación individual y colectiva, con acciones consistentes en la restitución, indemnización y rehabilitación, así como de reparación simbólica que comprende medidas de satisfacción y garantías de no repetición, de conformidad con lo establecido en la Ley 975 de 2005.

Los miembros de los grupos armados al margen de la ley que resulten declarados penalmente responsables, serán los obligados a la reparación individual y colectiva establecida en la respectiva sentencia proferida por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Los pagos de estas reparaciones serán realizados por intermedio de Acción Social-Fondo para la Reparación de Víctimas, procurando salvaguardar los derechos de las víctimas en igualdad de condiciones, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno del Fondo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Nacional llevará a cabo acciones de reparación colectiva que tiendan a la satisfacción y garantía de no repetición de las conductas punibles y en general cualquier tipo de acción orientada a recuperar la institucionalidad en las zonas más afectadas por la violencia, a promover los derechos de los ciudadanos afectados por los hechos de violencia y reconocer la dignidad de las víctimas, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones que en tal sentido formule la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el presupuesto asignado para el efecto.

Parágrafo 1°. Con el fin de materializar el derecho a la reparación, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las autoridades administrativas exhortarán a los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, para que lleven

a cabo actos preprocesales de restitución de bienes directamente a las víctimas, los cuales serán tenidos en cuenta como parte de la reparación al momento de proferir la sentencia respectiva.

Parágrafo 2°. Para efectos de la Ley 975 de 2005, la declaración de la responsabilidad civil relativa a la restitución y/o indemnización de perjuicios, estará supeditada a la determinación, en la sentencia condenatoria, de la responsabilidad penal de los miembros de los grupos armados al margen de la ley y a la realización del incidente de reparación integral de que trata el artículo 23 de la citada ley, sin que para ello se requiera que la víctima deba identificar un sujeto activo determinado. Tales obligaciones deberán ser fijadas en la sentencia condenatoria de que trata el artículo 24 de la mencionada ley.

En todo caso las víctimas, conforme a lo dispuesto en las normas vigentes, podrán optar por acudir a la jurisdicción civil con el fin de hacer efectiva la reparación de perjuicios a cargo de miembros de los grupos organizados al margen de la ley.

Parágrafo 3°. Se entenderá como medida de reparación colectiva la entrega, por parte de los desmovilizados, de bienes destinados al desarrollo de proyectos productivos en zonas afectadas por la violencia, que beneficien a desplazados, campesinos y reinsertados que carezcan de medios económicos para su subsistencia.

De la entrega de bienes para la reparación de las víctimas

Artículo 13. *Entrega de bienes para la reparación de las víctimas.* Los miembros de los grupos armados al margen de la ley deberán entregar los bienes ilícitos para sufragar con ellos o su producto, las acciones de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que propendan por la reparación de las víctimas de las conductas punibles cometidas durante y con ocasión de su pertenencia a esos grupos. En todo caso, la obligación de reparar a cargo de los mismos no se extingue con la entrega de bienes que no alcancen a cubrir integralmente lo dispuesto en la sentencia.

Cuando no sea posible que los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley entreguen los bienes destinados a la reparación de víctimas a paz y salvo respecto de las obligaciones que por cualquier concepto pesen sobre los mismos, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las Comisiones Regionales de restitución de bienes podrán invitar a las entidades acreedoras para que contribuyan con la reconciliación y la paz nacional mediante la celebración de conciliaciones o acuerdos de pago, condonación total o parcial de las deudas, de ser procedente, o implementando cualquier otro mecanismo que facilite la extinción de la obligación o el cumplimiento a través de mecanismos razonables de financiación.

Parágrafo. Cuando los bienes de los miembros del grupo armado al margen de la ley no figuren formalmente a nombre de los mismos, estos deberán realizar los actos dispositivos necesarios para deshacer la simulación y proceder a su entrega con destino a la reparación de las víctimas.

Respecto del tercero ajeno al grupo armado organizado al margen de la ley que exclusivamente haya participado en las conductas relacionadas con la adquisición, posesión, tenencia, transferencia y en general con la titularidad de los bienes ilícitos que sean entregados para la reparación de las víctimas, la Fiscalía General de la Nación podrá aplicar el principio de oportunidad.

Artículo 14. *Derecho de las víctimas a denunciar bienes no entregados.* Cuando la víctima considere que fue despojada ilícitamente de su dominio, posesión, usufructo o de cualquier otro derecho real o precario sobre un bien, como consecuencia de una conducta punible cometida por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se hayan acogido al procedimiento establecido por la Ley 975 de 2005, y pretenda la restitución del mismo, podrá presentar su pretensión en el incidente de reparación integral, cuyo trámite, decisión y efectividad se regirán por lo dispuesto en la citada ley.

Para efectos de reconocer a las víctimas los respectivos derechos sobre los bienes, la autoridad judicial deberá valorar la situación de extrema

vulnerabilidad de las mismas en los casos en que esta implique dificultades probatorias respecto de la titularidad del dominio y demás derechos reales, incluso a título precario. Con el mismo fin, podrá solicitar información a las oficinas de registro de instrumentos públicos, catastro, notarías, autoridades de la respectiva entidad territorial y a cualquier otra que estime pertinente.

En el evento de que el bien no haya sido previamente enlistado y entregado con destino a la reparación de la víctima, y existiendo prueba de tal despojo tampoco se produzca la entrega efectiva del bien, la autoridad judicial procederá a compulsar copias para que se inicien los procesos penales y de extinción de dominio a que haya lugar de conformidad con las normas vigentes al momento de la realización de la conducta, dentro de los cuales la víctima podrá hacer valer sus derechos.

Artículo 15. *Medidas cautelares.* Una vez indicados los bienes ilícitos, la Fiscalía Delegada, en Audiencia Preliminar, solicitará la adopción de medidas cautelares sobre los mismos, las cuales serán adoptadas de manera inmediata por el magistrado que ejerza el control de garantías y comprenderán entre otras la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes, de dinero en depósito en el sistema financiero, de títulos valores, y de los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física.

Mientras los recursos monetarios o títulos financieros y/o de valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarán a Acción Social-Fondo para la Reparación de Víctimas en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos.

Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de Acción Social-Fondo para la Reparación de Víctimas el cual tendrá a cargo la administración de los mismos que será provisional hasta tanto se profiera la sentencia

de extinción de dominio a su favor. Sin embargo, en aras de garantizar el derecho a la restitución, el magistrado que ejerza el control de garantías, a solicitud de la Fiscalía, del Ministerio Público o de la Víctima, podrá entregar en provisionalidad el bien a la víctima hasta que se resuelva sobre el mismo en la sentencia.

En todo caso la Fiscalía General de la Nación deberá adelantar las investigaciones y cruces de información que sean conducentes para determinar la existencia, ubicación y estado de todos los bienes cuya titularidad real o aparente corresponda a miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y podrá solicitar al magistrado de control de garantías la adopción de medidas cautelares sobre los mismos.

Artículo 16. Publicidad sobre los bienes entregados al fondo para la reparación de las víctimas. Con el fin de proteger los derechos de las víctimas y de los terceros de buena fe y posibilitar el ejercicio oportuno de sus derechos, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social pondrá de manera permanente en conocimiento del público el listado de bienes que en desarrollo de la Ley 975 de 2005 le hayan sido entregados para la reparación de las víctimas y posibilitará su consulta a través de sus oficinas a nivel territorial, así como de los medios tecnológicos de que disponga.

Los gastos originados en la publicidad prevista en el presente artículo se sufragarán con cargo al Fondo para la Reparación de Víctimas.

Del Fondo para la Reparación de las Víctimas

Artículo 17. Naturaleza y administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas. El Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por el artículo 54 de la Ley 975 de 2005 es una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción Social que funcionará con su estructura y será administrada por el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, quien será el ordenador del gasto.

En desarrollo de la administración ejercerá los actos necesarios para la correcta disposición,

mantenimiento y conservación de los bienes y/o recursos de acuerdo con su naturaleza, uso y destino, así como para el adecuado funcionamiento del Fondo teniendo en cuenta siempre el favorecimiento de los derechos de las víctimas.

Para tal efecto podrá contratar total o parcialmente el manejo de los recursos y bienes que ingresen al fondo, mediante encargo fiduciario, contratos o fondos de fiducia, contratos de administración, mandato, arrendamiento y demás negocios jurídicos que sean necesarios, los cuales se regirán por las normas de derecho privado.

Los gastos necesarios para la administración de los bienes y recursos del Fondo y para su adecuado funcionamiento serán sufragados con cargo a los rendimientos financieros de los bienes y recursos que conformen su patrimonio, y en los eventos en que no sean suficientes, podrá atenderlos con cargo al rubro de Presupuesto General de la Nación.

El Reglamento interno del Fondo, que será expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, establecerá las medidas y procedimientos necesarios para la adecuada administración y funcionamiento del Fondo, incluyendo un inventario y registro único para el control de bienes que contenga las especificaciones necesarias para su identificación, ubicación, determinación de su estado, situación jurídica, fiscal y de servicios públicos, valor catastral, estimado o comercial, entre otras. En todo caso, una vez le sean entregados bienes con destino a la reparación de las víctimas, deberá levantar un acta de recibo de los mismos.

Artículo 18. Sistema de información para la reparación de las víctimas. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social deberá diseñar, implementar y administrar un sistema de información que permita realizar cruces y seguimiento de los pagos realizados a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

Adicionalmente y para efectos de depurar la información requerida para el adecuado cumplimiento de sus funciones en beneficio de las víctimas, este sistema

contará con información que permita conocer el listado de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley respecto de los cuales la Fiscalía General de la Nación inicie investigación bajo el procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005, los incidentes de reparación integral cuya apertura sea decretada con ocasión de tales procesos y las víctimas que participen en los mismos, las sentencias condenatorias proferidas en ellos, las víctimas beneficiarias de reparación económica establecida en las mismas y su cuantía, los pagos respectivos realizados por intermedio del Fondo para la reparación de las Víctimas y la identificación de los bienes y/o recursos con cargo a los cuales se haya ejecutado el pago.

Para tales efectos, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial con competencia en materia de justicia y paz y demás entidades estatales que intervengan en la aplicación de la Ley 975 de 2005, deberán poner a disposición de Acción Social la información requerida, siempre que no se encuentre sometida a reserva legal.

De la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

Artículo 19. *Composición.* La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación estará integrada por:

1. El Vicepresidente de la República o su delegado, quien la presidirá.
2. El Procurador General de la Nación o su delegado.
3. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.
4. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
5. El Defensor del Pueblo o su delegado.
6. Dos representantes de organizaciones de víctimas, los cuales serán designados por los restantes

miembros de la Comisión entre los postulados por las organizaciones de víctimas.

7. El Director de Acción Social o su delegado, quien desempeñará la Secretaría Técnica.

8. Cinco personalidades, designadas por el Presidente de la República.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación podrá invitar a sus sesiones a los funcionarios del Estado que considere pertinente, a organismos o personalidades nacionales o extranjeras y a cualquier otra que considere oportuno.

Artículo 20. *Procedimiento para la designación de los representantes de las víctimas.* Para la designación de los dos representantes de organizaciones de víctimas, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación llevará a cabo una convocatoria pública, con el fin de que las organizaciones de víctimas interesadas, postulen a su representante, para lo cual deberán reunirse los siguientes requisitos.

- a) La organización de víctimas deberá estar legalmente constituida, contando con la respectiva personería jurídica;
- b) La documentación pertinente que acredite la trayectoria de la respectiva organización;
- c) Hoja de vida del candidato con los respectivos anexos que acrediten su pertenencia a la organización y su experiencia;
- d) Acta de la organización, en la cual conste expresamente que la postulación fue resultado de la aplicación de mecanismos democráticos de elección al interior de la misma.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación procederá a elegir los dos representantes de organizaciones de víctimas, entre los postulados por las distintas organizaciones que se hayan presentado dentro del plazo previsto en la convocatoria pública y cumplan los requisitos citados. Para tal efecto tendrá

en cuenta la trayectoria y experiencia del postulado y de la organización que lo propone, la representatividad de la organización y las calidades acreditadas por el postulado.

Artículo 21. *Desarrollo de sus funciones.* Para el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 51 de la Ley 975 de 2005, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, tendrá en cuenta que:

1. El cumplimiento de las funciones administrativas y judiciales relacionadas con la desmovilización y reincorporación de miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, además de las relacionadas con la investigación, juzgamiento y concesión de beneficios previstas en las Leyes 782 de 2002 y 975 de 2005, corresponde exclusivamente a las autoridades estatales competentes.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, para el ejercicio de sus funciones, en especial de las que tratan los numerales 52.1, 52.3, 52.4 y 52.6 del artículo 51 de la Ley 975 de 2005, solicitará a las autoridades competentes su intervención o la realización de las investigaciones correspondientes, según sea el caso, así como el suministro de la información necesaria y pertinente que se requiera, salvo que se encuentre sometida a reserva legal. Las respectivas entidades deberán tramitar la solicitud y prestar la colaboración necesaria.

2. Propiciará la colaboración armónica entre las entidades y órganos del Estado relacionadas con la aplicación de las leyes previstas en el numeral anterior, para lo cual propondrá mecanismos expeditos de interlocución con el fin de que las actividades sean desarrolladas de manera oportuna y eficiente.

3. Diseñará un mecanismo idóneo, transparente y ágil para la recepción de solicitudes, peticiones y/o quejas de las víctimas y las encausará remitiéndolas a las respectivas instituciones o autoridades competentes con el fin de que estas les brinden el trámite adecuado. Igualmente realizará el seguimiento del mismo.

4. Diseñará un Programa de Restitución de Bienes, con el concurso de las Comisiones de Restitución de Bienes, el cual servirá de base para la

labor de las autoridades nacionales y locales competentes.

5. Propondrá cuando lo estime oportuno, programas restaurativos dirigidos a atender el desarrollo humano y social de las víctimas, las comunidades y los ofensores, con el fin de que se restablezcan los vínculos sociales y se posibilite la reconciliación, los cuales se podrán implementar con la colaboración del Gobierno Nacional, las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones religiosas y organismos de cooperación internacional y podrán ser operados por la Defensoría del Pueblo, por organizaciones civiles autorizadas por el Gobierno Nacional, casas de justicia o centros de convivencia ciudadana, entre otros. Cuando así lo decida y cuente con el presupuesto requerido, la Comisión podrá implementar directamente algunos de los programas restaurativos.

6. Podrá solicitar informes a las diferentes autoridades, los cuales serán tenidos en cuenta para la formulación de las recomendaciones que lleve a cabo. Igualmente, para tal fin, podrá solicitar información pertinente a las organizaciones internacionales con las cuales las diferentes entidades estatales hayan celebrado convenios de cooperación.

7. Tendrá acceso permanente al sistema de información para la reparación de las víctimas, de que trata el artículo 18 del presente decreto

Artículo 22. *Recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.* Los recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación, se asignarán a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social y el ordenador del gasto será el Alto Consejero para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Acción Social podrá celebrar convenios interadministrativos, con el objeto que las entidades del Estado, apoyen el ejercicio de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Parágrafo. Para el manejo de los recursos

provenientes de donaciones nacionales e internacionales para dar cumplimiento a la misión de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, podrá contratarse una fiducia, en la que el ordenador del gasto y la destinación de los recursos será la dispuesta por el donante, cuando sea del caso.

De las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes

Artículo 23. *Funciones de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.* Las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes desarrollarán las siguientes actividades bajo la coordinación y orientación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación:

1. Colaborar con las autoridades para implementar el Programa de Restitución de Bienes diseñado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

2. Orientar a las víctimas y/o terceros de buena fe sobre los trámites que deberán adelantar con el fin de acceder a la satisfacción de sus pretensiones.

3. Solicitar, a petición de la víctima y/o de los terceros de buena fe, la información sobre el estado del cumplimiento de las sentencias que ordenan la restitución de bienes.

4. Elaborar y reportar periódicamente a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación un informe sobre sus actividades.

5. Las demás previstas en el presente decreto, y las que se asignen de acuerdo con las necesidades del proceso, por parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Nacional o del Gobierno Nacional.

Disposiciones complementarias

Artículo 24. *Elección de Magistrados de los Tribunales Superiores para Justicia y Paz.* Los Magistrados de los Tribunales Superiores que se creen

en virtud de la Ley 975 de 2005, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales serán elaboradas siguiendo para el efecto el mismo procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996.

Artículo 25. *Apoyo para protección.* Para los efectos previstos en el inciso final del artículo 15 de la Ley 975 de 2005, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado prestarán el apoyo necesario a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, según corresponda.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 782 de 2002, y 11 y 19 de la Ley 938 de 2004 el Fiscal General de la Nación deberá establecer las directrices del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo pertinente para la protección y seguridad personal de los funcionarios y de la Rama Judicial.

Artículo 26. *Conductas de ejecución permanente.* Cuando se trate de conductas punibles de ejecución permanente, la Ley 975 de 2005 solamente será aplicable en aquellos eventos en que la consumación, materializada con el primer acto, se haya producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma.

En todo caso para acceder a los beneficios previstos en la citada ley, será necesario que en los delitos de ejecución permanente haya cesado la afectación al bien jurídico y se preste colaboración eficaz para materializar los derechos de las víctimas, en especial el restablecimiento de la libertad de las mismas y/o su ubicación.

Artículo 27. *Rebaja de penas.* Para los efectos previstos en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, quienes al momento de entrar en vigencia tal ley, estuvieran condenados, tendrán derecho a una rebaja de una décima parte de la pena impuesta en la sentencia, siempre que se reúnan todos los siguientes requisitos:

1. Que la condena se haya proferido por conductas punibles diferentes a las de lesa humanidad, narcotráfico o por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales: acceso carnal y/o acto sexual violento, acceso carnal y/o actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de catorce años, acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir, inducción y/o constreñimiento a la prostitución, trata de personas, estímulo a la prostitución de menores, pornografía infantil y turismo sexual.

Tratándose de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, adicionalmente se requiere que no se trate de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 975 de 2005.

2. Que la persona se encuentre cumpliendo la pena y haya observado buen comportamiento, lo cual será certificado por el director del establecimiento carcelario.

3. Que en la petición elevada por el condenado ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, manifieste su compromiso de no reincidir en acto delictivo.

4. Por cooperación con la justicia, como presupuesto para acceder a la rebaja, debe entenderse la colaboración, ayuda, contribución, apoyo o asistencia que el procesado haya prestado a los fiscales y jueces a cargo de la investigación adelantada en su contra, y cualquier otra que, debidamente probada, haya brindado en asuntos diversos.

En todo caso, la cooperación no implica que el beneficiario se haya acogido previamente a sentencia

anticipada o a los beneficios por colaboración con la justicia.

5. La realización de actos de reparación de las víctimas, siempre y cuando hayan sido individualizadas en el respectivo proceso.

No se podrá negar la rebaja al interno que carezca de capacidad económica. En tal caso, la reparación de las víctimas se realizará con medidas simbólicas de satisfacción tendientes a restablecer la dignidad de la víctima, difundir la verdad sobre lo sucedido o con garantías de no repetición.

Parágrafo. Las rebajas obtenidas con ocasión de colaboración con la justicia o sentencia anticipada en los respectivos procesos no excluirán la rebaja aquí prevista.

En ningún caso la rebaja prevista en el presente artículo podrá ser concurrente con la pena alternativa de que trata el artículo 29 de la Ley 975 de 2005.

Artículo 28. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 30 de diciembre de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.